



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

Visto el expediente relativo al recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

I. El 01 de abril de 2013, la particular presentó una solicitud de acceso a la información, a través del sistema electrónico Infomex, mediante el cual requirió a la Procuraduría General de la República lo siguiente:

Modalidad preferente de entrega de información:
Entrega por Internet en el INFOMEX

Descripción clara de la solicitud de información:

Con base en el art 6, solicito los documentos que contengan información sobre las acciones realizadas para poner a disposición de los familiares información sobre el progreso de la investigación en el caso de los 49 cuerpos encontrados en Cadereyta, Nuevo León en mayo de 2012, el caso de las 72 personas migrantes encontradas en San Fernando, Tamaulipas el 25 de agosto de 2010 y en el caso de 193 cuerpos encontrados en fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas en marzo/abril de 2011. (Sic)

II. El 29 de abril de 2013, la Procuraduría General de la República respondió, a través del sistema electrónico Infomex, a la solicitud de acceso a la información en los términos siguientes:

Con fundamento en el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la información solicitada está disponible públicamente para su consulta:

Dirección de Internet en donde se encuentra la información: ME PERMITO COMUNICARLE QUE LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA DISPONIBLE PÚBLICAMENTE, LA CUAL PUEDE SER CONSULTADA EN EL PORTAL DE LA INSTITUCIÓN <http://www.pgr.gob.mx>.
Publicación en donde se encuentra la información: 0
Lugar donde se puede consultar: 0

Archivo: 0001700101513_045.pdf
[...]

El archivo adjunto contiene copia del oficio número **SJAI/DGAJ/6618/2013**, de fecha 29 de abril de 2013, emitido por el titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, mediante el cual se indicó lo siguiente:



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

[...]

En observancia al principio de máxima publicidad, se le hace del conocimiento que existe información en relación a su solicitud que se encuentra disponible públicamente en el Sistema de Solicitudes de Información (Infomex), por lo anterior se le sugiere consultar la siguiente dirección electrónica <https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action> donde deberá seleccionar el apartado correspondiente a "Consulta Pública de Solicitudes" e ingresar el número de folio 0001700160811.

Se le hace del conocimiento que la información que es pública se encuentra disponible en la página de Internet de la Institución en www.pqr.gob.mx en los siguientes Boletines de Prensa:

1040/10 de fecha 29 de agosto de 2010.
1050/10 de fecha 01 de septiembre de 2010.
1051/10 de fecha 01 de septiembre de 2010.
1063/10 de fecha 05 de septiembre de 2010.
1189/10 de fecha 16 de octubre de 2010.
093/11 de fecha 31 de enero de 2011.
1568/11 de fecha 14 de noviembre de 2011.
214/12 de fecha 13 de mayo de 2012.

Se anexan copias simples de los Boletines de Prensa para mejor proveer.

Se sugiere dirigir la presente solicitud a la Secretaría de Gobernación, la cual tiene sus oficinas en
Abraham González No 48, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P.
06600, Teléfono (55) 57 28 74 00, o bien, consultar la página electrónica <http://www.segob.gob.mx> donde podrá ingresar para obtener la información solicitada.

Asimismo también podrá dirigir la presente solicitud al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual tiene sus oficinas en Avenida Mariano Escobedo No. 456, Colonia Nueva Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, México, Distrito Federal, C.P. 115890, Teléfono (55) 50-01-36- 50, o bien, consultar la página electrónica <http://www.secretariadoeiecutivosnp.gob.mx> , donde podrá tener acceso para poder obtener mayor información.

También podrá dirigir la presente solicitud a la Secretaria de Relaciones Exteriores, la cual tiene sus oficinas en Plaza Juárez No. 20, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06010, Teléfono (55) 36-86-51-00, o bien consultar la página electrónica <http://www.sre.gob.mx> donde podrá ingresar para obtener mayor información.



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

Ahora bien, si usted tiene alguna duda sobre la respuesta otorgada, puede acudir a esta Unidad de Enlace de Acceso a la Información, ubicada en Río Guadiana No. 31, Planta Baja, Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06500, en México, Distrito Federal, o llamar al teléfono (55) 5346 0000, Ext. 5716 y 5717; o bien, escribanos al correo levdetransparenciapgr.gob.mx, en donde con gusto atenderemos sus dudas y/o comentarios.

[...]

Anexo al oficio anteriormente citado, el sujeto obligado adjuntó copia de las notas de prensa citadas en el cuerpo del mismo, mismas que se señalan a continuación:

- 1040/10 de fecha 29 de agosto de 2010.
- 1050/10 de fecha 01 de septiembre de 2010.
- 1051/10 de fecha 01 de septiembre de 2010.
- 1063/10 de fecha 05 de septiembre de 2010.
- 1189/10 de fecha 16 de octubre de 2010.
- 093/11 de fecha 31 de enero de 2011.
- 1568/11 de fecha 14 de noviembre de 2011.
- 214/12 de fecha 13 de mayo de 2012.

III. El 20 de mayo de 2013, se recibió en este Instituto el recurso de revisión interpuesto por la particular en contra de la respuesta emitida por la Procuraduría General de la República, a su solicitud de acceso a la información, en el cual manifestó lo siguiente:

Acto que se recurre y puntos petitorios:

La respuesta de la autoridad es notoriamente incompleta, inservible y no se refiere con especificidad a la información que solicito. Esta respuesta, como podrá observar este H. Instituto, es contraria a mi derecho de acceso a la información, de acuerdo a lo que expongo en el documento adjunto. (Sic)

Adjunto a su recurso de revisión, la recurrente anexó copia del siguiente escrito:

[...]

El 01 de abril de 2013, hice una solicitud de información a la Procuraduría General de la República, en la cual solicitaba documentación precisa sobre:

Acciones realizadas para poner a disposición de los familiares información sobre el progreso de la investigación en el caso de los 49 cuerpos encontrados en Cadereyta, Nuevo León en mayo de 2012; el caso de las 72 personas migrantes encontradas en San Fernando, Tamaulipas el 25 de agosto de 2010; y en el caso de 193 cuerpos



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

encontrados en fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas en marzo/abril de 2011.

Ésta fue procesada por el sistema INFOMEX y enseguida se le asignó el número de folio 0001700104513. El día 29 de abril de 2013, la entidad respondió afirmando que "la información está disponible públicamente".

En su respuesta, la Unidad de enlace de la autoridad menciona que existe información relacionada con mi solicitud disponible en el Sistema de Solicitudes de Información de INFOMEX bajo el número de folio 0001700160811. Posteriormente, la Unidad indica que la información que solicita también se encuentra de forma pública en ocho boletines de prensa publicados en la página web de la institución. Asimismo, se me sugiere dirigir la misma solicitud a tres otras instituciones.

La respuesta otorgada por la autoridad es notoriamente **incompleta, desactualizada y no se refiere a la información que solicito**. La solicitud ingresada está en sentido de **información específica que documenta las actuaciones de esta institución**; la respuesta otorgada, como podrá observar este H. Instituto, es contraria a mi derecho de acceso a la información, por lo que a continuación expongo:

Información incompleta y desactualizada

El 08 de septiembre de 2011 ingresé una solicitud de información a la Procuraduría General de la República, en la cual inquiría sobre la masacre de 72 migrantes ocurrida en San Fernando, Tamaulipas en agosto de 2010. La solicitud fue procesada por el sistema y fue rotulada con el número de folio 0001700160811. La Unidad de enlace de dicha entidad respondió el día 07 de octubre de 2011, compartiendo sólo parte de la información que solicité en esa ocasión: el número de víctimas identificadas, con su edad, sexo y nacionalidad; restos pendientes por identificar; y ubicación de los mismos. Sin embargo, la respuesta a esta solicitud no indicaba qué tipo de ayuda se estaba dando a las familias de las víctimas cuyos restos han sido identificados.

En esta ocasión, si bien retomo hasta cierto punto parte de la información requerida en la solicitud descrita anteriormente, indago sobre una cuestión más amplia: inquiero **sobre dos eventos nuevos** (restos localizados en las 49 fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas en abril de 2011; y restos localizados en Cadereyta, Nuevo León en mayo de 2012), aparte del ya mencionado (masacre de los 72 migrantes ocurrida entre el 22 y 23 de agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas), y respecto a éste último, está implícito que **solicito información actualizada y ampliada**, pues la información con la que cuento a partir de la solicitud 0001700160811 ya no puede considerarse como vigente, y como indiqué antes, no



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

indica qué tipo de ayuda se estaba dando a las familias de las víctimas cuyos restos han sido identificados.

Información que no se refiere a mi solicitud

En su respuesta, la Unidad de enlace de la entidad indica que la información que solicito también se encuentra de forma pública en ocho boletines de prensa publicados en la página web de la institución: 1040/10, 1050/10, 1051/10, 1063/10, 1189/10, 093/11, 1568/11 y 214/12; y anexa copias de los mismos.

Una acuciosa lectura a cada uno de estos documentos permite entrever que **no hacen referencia al tema requerido en mi solicitud**; dan cuenta brevemente de los episodios en cuestión (093/11, 1189/10 y 214/12), ofrecen recompensas por información sobre los mismos (093/11), y recalcan acciones judiciales al respecto (1040/10, 1050/10, 1051/10, 1063/10, 1189/10 y 1568/11). Sin embargo, **ninguno contiene información de forma manifiesta o implícita sobre las acciones realizadas por la entidad para poner a disposición de los familiares información sobre el progreso de la investigación en cada uno de los tres episodios referidos.**

Argumentos

De conformidad con el **principio de legalidad**, todas las autoridades deben realizar las acciones que le imponen las leyes; es decir, únicamente pueden realizar lo que tienen expresamente conferido como atribuciones. En el momento que dejan de cumplir con sus obligaciones, incumplen con su mandato y se hacen acreedoras a diferentes tipos de responsabilidades.

Ahora bien, tanto la Ley orgánica de la Procuraduría General de la República como la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental imponen una serie de obligaciones positivas para que dicha autoridad realice ciertas funciones en materia de transparencia, archivos y generación de información que documente su quehacer cotidiano.

En este sentido, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República menciona que:

Artículo 5, Sección II Es función de la Procuraduría General de la República recabar, capturar, procesar, administrar y resguardar la información de los asuntos que conozca, utilizando dispositivos tecnológicos adecuados para alimentar las bases de datos correspondientes (...) así como consultar, analizar y explotar la información sobre seguridad pública contenida en dichas bases de datos.



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

Asimismo, el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República menciona que:

Artículo 13. *Son facultades genéricas de los titulares de las unidades especializadas previstas en el artículo 3 de este Reglamento y las fiscalías, así como de las creadas por Acuerdo del Procurador, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley Orgánica, adicionalmente a las contempladas en el artículo anterior, las siguientes:*

I. Sistematizar y utilizar para el cumplimiento de sus atribuciones la información contenida en las averiguaciones previas y procesos respectivos, relacionados con asuntos de su competencia, en coordinación con el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia y las demás áreas competentes de la Procuraduría;

Tal como lo refieren estas leyes, existen obligaciones de esta dependencia para sistematizar la información relacionada con averiguaciones previas, para la generación de informes de gestión institucionales y en general para documentar la información relacionada con el ejercicio de sus funciones.

Aunado a las propias obligaciones internas de la PGR, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental menciona que:

Artículo 3. *Para los efectos de esta Ley se entenderá por:*

III. Documentos: *Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;*

V. Información: *La contenida en los documentos que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título;*

En este sentido, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) ofrece una definición amplia de lo que debemos entender por documento y reitera la obligación de todas las autoridades de documentar el ejercicio de sus facultades o actividades sin importar su fuente o fecha de elaboración.

Ahora bien, es importante recordar que, más allá de la documentación del ejercicio de las funciones de toda autoridad, la información gubernamental es eminentemente



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

pública y debe estar sujeta al principio de máxima publicidad de la misma. Es decir la regla o el principio general bajo el cual se rige el Estado republicano Mexicano es la publicidad de todos y cada uno de sus actos de gobierno, que impliquen recursos públicos o repercutan en el interés público. Así lo deja claramente estipulado la fracción I del artículo sexto constitucional.

Artículo Sexto Constitucional:

Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

Asimismo, vale la pena recordar que aunado al principio de máxima publicidad, existen otras reglas de interpretación de la propia ley de transparencia como la máxima divulgación y disponibilidad de la información. La Ley Federal de Transparencia menciona que:

Artículo 6. *En la interpretación de esta Ley y de su Reglamento, así como de las normas de carácter general a las que se refiere el Artículo 61, se deberá favorecer el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados.*

El derecho de acceso a la información pública se interpretará conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y la interpretación que de los mismos hayan realizado los órganos internacionales especializados.

La máxima disponibilidad y máxima accesibilidad se refiere al mandato u obligación del Estado de satisfacer de la mejor manera, de la forma más efectiva y completa el derecho de acceso a la información de sus ciudadanos; por ello se crean las versiones públicas o se obliga a la documentación en formatos abiertos que le permitan al solicitante manipular conforme a su interés. Asimismo, tal y como refiere el artículo 44 de la LFTAIPG la solicitud de los ciudadanos debe resolverse atendiendo en la mayor medida de lo posible a la solicitud del interesado.

Como podrá observar este H. Instituto, la autoridad vulnera con su respuesta mi derecho de acceso a la información porque la respuesta que me entrega es incompleta, desactualizada, no se refiere a la información que solicito, y en ningún



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

**momento ni bajo ninguna circunstancia realiza un ejercicio exhaustivo para
cumplir con las reglas de máxima publicidad, máxima divulgación y máxima
disponibilidad** bajo las cuales se trata la información gubernamental.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a este H. Instituto que ordene la entrega completa, desglosada y accesible de la información que solicito.

[...]

IV. El 20 de mayo de 2013, el Comisionado Presidente de este Instituto asignó el número de expediente **RDA 2490/13** al recurso de revisión y, con base en el sistema aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisionado Ponente Ángel Trinidad Zaldívar para los efectos del artículo 55, fracción I de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*.

V. El 28 de mayo de 2013, el Comisionado Ponente acordó la admisión del recurso de revisión interpuesto por la solicitante en contra de la Procuraduría General de la República, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 88 del *Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*.

VI. El 04 de junio de 2013, se notificó a la Procuraduría General de la República, a través de la Herramienta de Comunicación, la admisión del recurso de revisión, otorgándole un plazo de siete días hábiles a partir de dicha notificación para que manifestara lo que a su derecho conviniera y formulara alegatos, dando cumplimiento al artículo 88 del *Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*.

VII. El 04 de junio de 2013, se notificó a la particular a través de correo electrónico, la admisión del recurso de revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 86, fracción III del *Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, y con fundamento en el artículo 55, fracción III de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, se le informó sobre su derecho para formular alegatos.

VIII. El 12 de junio de 2013, la Procuraduría General de la República, presentó ante este Instituto, a través de la Herramienta de Comunicación, el oficio número **SJAI/DGAJ/8865/2013**, de fecha 11 de junio de 2013, suscrito por el titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del sujeto obligado y dirigido al Comisionado Ponente, mediante el cual expresó los alegatos siguientes:



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

[...]

ALEGATOS

UNICO: En relación a los argumentos vertidos por el hoy recurrente la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada señalo lo siguiente:

"PRIMERO. Deviene infundado el recurso planteado por la recurrente en atención a que la solicitud de acceso a la información folio 0001700104513 fue atendida en tiempo y forma, fundando y motivando por parte de la Unidad de Enlace de esta Institución la respuesta otorgada, toda vez que por parte de esta Subprocuraduría se contestó en la forma siguiente:

"Al respecto, me permito manifestar a usted, que una vez que se solicitó la petición en cuestión a la Unidad Especializada, adscrita a esta Subprocuraduría, indicó que no cuenta con antecedentes de la información requerida."

En consecuencia de lo anterior, la Unidad de Enlace le otorgó la respuesta, conforme a las facultades que le otorga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, le indicó a la hoy recurrente que la información solicitada considerada como pública se encuentra disponible en la página de Internet de la Institución en www.pqr.gob.mx en los Boletines de Prensa 1040/10, 1050/10, 1051/10, 1063/10, 1189/10, 093/11, 1568/11 y 214/12, además se le derivó a consultar el Sistema de Solicitudes de Información (Infomex), por lo anterior se le sugiere consultar la siguiente dirección electrónica <https://www.infomex.orq.mx/gobiernofederal/home.action>, donde deberá seleccionar el apartado correspondiente a "Consulta Pública de Solicitudes" e ingresar el número de folio 0001700160811, documentos con lo que se dio respuesta a su solicitud de información, en consecuencia, se debe de desechar el recurso de revisión por ser notoriamente improcedente de conformidad con lo previsto en el artículo 58, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

SEGUNDO. Ahora bien, el recurrente menciona en sus argumentos que: "...La respuesta de la autoridad es notoriamente incompleta, inservible y no se refiere con especificidad a la información que solicito. Esta respuesta, como podrá observar este H. Instituto es contraria a mi derecho de acceso a la información, de acuerdo a lo que expongo en el documento adjunto...", al respecto, se le hace del conocimiento al hoy recurrente, que en ningún momento se le ha negado la información que requirió, toda vez, que la información que solicitó materia del presente Recurso de Revisión se encuentra inmersa en los boletines de prensa 438, 453/11, 606/11, 613/11, 643/11, 648/11, 742/11, 784/11, 812/11, 1159/11 y 1624/11, de los que se anexan al presente con los que se da respuesta a su solicitud de información.

Además, cabe precisar que la información que obra en el expediente de averiguación previa, tiene el carácter de reservado, tal y como lo dispone el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales en relación con el



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

artículo 14 fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

En consecuencia se debe también desechar el recurso de revisión por ser notoriamente improcedente de conformidad con lo previsto en el artículo 58 fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental."

Por último, si bien la Unidad Administrativa indicó que no se lleva un control o estadística como la solicitada, también lo es que la misma no está obligada a generar documentos Ad Hoc; tal y como se advierte en el Criterio 09-10, emitido por el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos que a la letra señala:

"Las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad hoc para responder una solicitud de acceso a la información. Tomando en consideración lo establecido por el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos, las dependencias y entidades no están obligadas a elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información, sino que deben garantizar el acceso a la información con la que cuentan en el formato que la misma así lo permita o se encuentre, en aras de dar satisfacción a la solicitud presentada.

Expedientes:

0438/08 Pemex Exploración y Producción. Alonso Lujambio trazaba'.
1751/09 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.
Maria Marván Laborde.
2868/09 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Jacqueline
Peschard Mariscal.
5160/09 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ángel Trinidad
Zaldívar.
0304/10 Instituto Nacional de Cancerología. Jacqueline Peschard
Mariscal.-
(Sic).

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los preceptos legales antes mencionados se considera viable que el H. Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección a Datos Personales, tenga a bien a **confirmar** la respuesta otorgada por esta Procuraduría General de la República, a través de su oficio SJA/DGAJ/6618/2013, por medio del cual se le hizo del conocimiento que en observancia al principio de máxima publicidad que existe información en relación a su solicitud que se encuentra disponible públicamente en el Sistema de Solicitudes de Información (Infomex), por lo anterior se le sugiere consultar la siguiente dirección electrónica <https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action> donde deberá seleccionar el apartado correspondiente a "Consulta Pública de Solicitudes" e ingresar el número de folio 0001700160811.



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

Por lo expuesto y fundado, atentamente solicito a usted H Comisionado:

PRIMERO.- En atención a las consideraciones señaladas en el presente ocurso, tenga por reconocida mi personalidad, y las manifestaciones que realizo, para los efectos legales a que haya lugar

SEGUNDO.- Tenga por cumplida la formulación y entrega de alegatos y en tal virtud, solicito tome en cuenta lo expuesto en líneas anteriores.

TERCERO.- En su oportunidad, previos los trámites previstos por la Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información, se proceda a resolver en términos del artículo 58, fracción II Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para manifestarle mi sincera y distinguida consideración.

[...]

Adjunto a su escrito de alegatos, el sujeto obligado anexó copia del oficio SJA/DGAJ/8864/2013, de fecha 11 de junio de 2013, mismo que a la letra señala:

[...]

Con fundamento en lo establecido por los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 4, 28 fracciones II, IV, 41, 43, 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 de su Reglamento; así como el artículo 49 fracción XV del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en alcance al oficio SJA/DGAJ/6618/2013 de fecha 29 de Abril del año en curso, se le informa lo siguiente:

Se le hace del conocimiento que bajo el principio de máxima publicidad y búsqueda exhaustiva, su solicitud de acceso a la información se derivó para su atención a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, quien informó lo siguiente:

"Al respecto, me permito manifestar a usted, que una vez que se solicitó la información a la Unidad Especializada, adscrita a esta Subprocuraduría, indicaron que no cuentan con la información requerida."

Ahora bien, si usted tiene alguna duda sobre la respuesta otorgada, puede acudir a esta Unidad de Enlace de Acceso a la Información, ubicada en Río Guadiana No. 31, Planta Baja, Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06500, en México, Distrito Federal, o llamar a los teléfonos (55) 53460000, Ext. 5716 y 5717; o bien, escribanos al correo leydetransparencia@pgr.gob.mx, en donde con gusto aclararemos sus dudas y/o comentarios.

[...]



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

IX. El 12 de junio de 2013, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 55 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, el Pleno de este Instituto acordó ampliar por un plazo igual el periodo de resolución previsto por las fracciones I y V del precepto legal en comento.

X. El 14 de junio de 2013, la recurrente remitió a este Instituto su escrito de alegatos, a través de los cuales manifestó lo siguiente:

[...]

Antecedentes

I. En fecha 01 de abril de 2013, hice una solicitud de información a la Procuraduría General de la República, en la cual solicitaba documentación precisa sobre:

Acciones realizadas para poner a disposición de los familiares información sobre el progreso de la investigación en el caso de los 49 cuerpos encontrados en Cadereyta, Nuevo León en mayo de 2012; el caso de las 72 personas migrantes encontradas en San Fernando, Tamaulipas el 25 de agosto de 2010; y en el caso de 193 cuerpos encontrados en fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas en marzo/abril de 2011.

Ésta fue procesada por el sistema INFOMEX y enseguida se le asignó el número de folio 0001700104513.

II. El día 29 de abril de 2013, la entidad respondió afirmando la "la información está disponible públicamente". En su respuesta, la Unidad de enlace de la autoridad menciona que existe información relacionada con mi solicitud disponible en el Sistema de Solicitudes de Información de INFOMEX bajo el número de folio 0001700160811. Posteriormente, la Unidad indica que la información que solicita también se encuentra de forma pública en ocho boletines de prensa publicados en la página web de la institución. Asimismo, se me sugiere dirigir la misma solicitud a tres otras instituciones.

III. Inconforme con esta respuesta en los términos del Artículo 50 Fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, presenté un recurso de revisión ante este H. Instituto el día 20 de mayo de 2013, mismo que fue admitido el día 28 de mayo por la oficina del Comisionado Gerardo Laveaga Rendón, dando con esto inicio al expediente RDA 2490/13.

IV. En fecha 14 de junio de 2013, el Lic. Mario Miguel Ortega, Director General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, en virtud de lo solicitado por este H. Instituto en el punto tercero del acuerdo de admisión del recurso, por medio del Oficio No. SJAI/DGAJ/8864/2013, enviado a través de correo electrónico, manifestó lo siguiente:



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar**

Se le hace del conocimiento que bajo el principio de máxima publicidad y búsqueda exhaustiva, su solicitud de acceso a la información se derivó para su atención a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, quien informó lo siguiente:

"Al respecto, me permito manifestar a usted, que una vez que se solicitó la información a la Unidad Especializada, adscrita a esta Subprocuraduría, indicaron que no cuentan con la información requerida."

Alegatos

La información solicitada a la entidad hace parte de los archivos que el sujeto obligado documenta con motivo de sus funciones

I. La Procuraduría General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, ha abierto por lo menos cuatro averiguaciones previas y actas circunstanciadas con motivo de los eventos referidos en mi solicitud (PGR/TAMPS /MAT-III/2194/2010, PGR/SIEDO/UEIS/197/2011, PGR/SIEDO/UETMIO/067/2011 y AC/PGR/NL/GPE-J/529/D/2012). Como consta en estos documentos, así como se ha reportado en medios de prensa de circulación nacional, los restos humanos de algunas víctimas de estos sucesos ya han sido identificados, y en algunos casos tratándose de extranjeros, repatriados (véase, por ejemplo, Turati, M., "Fosas de San Fernando: evidencias se vuelven humo", en Proceso, edición 1886, diciembre de 2012 [en línea], disponible en <http://www.proceso.com.mx/?p=328600>). La identificación y la repatriación implican que para la Procuraduría General de la República existe un grupo de víctimas, tanto directas como familiares, plenamente identificadas.

De acuerdo con el Artículo 20 constitucional inciso C fracción I, son derechos de la víctima: recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la constitución y, cuando lo solicite, **ser informado del desarrollo del procedimiento penal.**

En este sentido, sírvase este H. Instituto recordar que la Ley General de Víctimas establece como víctimas a quienes hayan sufrido un daño o menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito. Asimismo, esta Ley recalca que son derechos de las víctimas de cara a la investigación del delito y desarrollo del proceso penal, entre otros, los contemplados en el Artículo 1 fracciones I, III, V, VII, IX, X, XXIV, XXVII, el Artículo 12 fracción III, y los Artículos 14, 18, 21, 22, 117. De igual manera, señala que **son obligaciones de los servidores públicos, particularmente aquellos vinculados con el Ministerio Público, informar a las víctimas todo lo relativo a la investigación del delito y a la ejecución de la acción penal,** de acuerdo con los Artículos 120 fracciones V y XIV, y el Artículo 123.

Finalmente, el Código Federal de Procedimientos Penales resalta que **es obligación del Ministerio Público proporcionar atención a víctimas,** ofendidos o testigos del delito, **garantizando los derechos** que en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

En tanto lo anterior, es inválida la afirmación que hace la autoridad obligada en el Oficio No. SJA/DGAJ/8864/2013, pues su marco normativo le exige poner a disposición de las víctimas u ofendidos del delito información relativa al progreso de su investigación.

Acceder a la información solicitada es sinónimo, para las víctimas, de garantía a su derecho a la verdad y justicia, y para la sociedad, de rendición de cuentas por parte del sujeto obligado

II. La Suprema Corte de Justicia de la Nación recalcó el doble carácter del derecho de acceso a la información, como un derecho en sí mismo, pero también como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos. En este sentido, mediante el acceso a la información, que sólo este H. Instituto puede garantizar, se está velando de forma directa por el derecho a la verdad y a la justicia de los y las familiares víctimas del delito, así como asegurando la rendición de cuentas por parte de la sociedad entera.

Dado lo anterior, si el sujeto obligado hace de conocimiento público las acciones realizadas para poner a disposición de los familiares información sobre el progreso de la investigación de los eventos referidos, se estaría elevando un importante precedente que (a) asegura el derecho a la verdad y a la justicia de todas las familias implicadas, cuyos familiares se presumen dentro del grupo de víctimas de estos hechos y que aún no han sido localizados/identificados; y (b) da herramientas a la sociedad en su conjunto para exigir una rendición de cuentas por parte de la autoridad obligada.

Por lo manifestado previamente y con fundamento en el Artículo 55 Fracción III de la LFTAIPG, solicito a este H. instituto resolver lo siguiente:

PRIMERO. Tener por presentados los alegatos en tiempo y forma que refiero en el presente escrito.

SEGUNDO. Determine que la información dada por el sujeto obligado en la respuesta a la solicitud 0001700104513 mediante los oficios SJA/DGAJ/8864/2013 y SJA/DGAJ/6618/2013 es inválida.

TERCERO. Inste al sujeto obligado a buscar en sus archivos la información solicitada de manera exhaustiva, de forma tal que pueda compartirla en su totalidad.

[...]

XI. El 25 de junio de 2013, mediante la Herramienta de Comunicación, se notificó a la Unidad de Enlace de la Procuraduría General de la República, el acuerdo de ampliación de plazos de resolución referido en el antecedente número VIII de la presente.



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

XII. El 08 de julio de 2013, con fundamento en el artículo 86 del *Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, se notificó a la hoy recurrente el acuerdo de ampliación de plazos de resolución señalado.

XIII. El 06 de agosto de 2013, se recibió en este Instituto un alcance al escrito de alegatos del sujeto obligado, a través del cual expresa lo siguiente:

[...]

I. Mediante oficio SJA/DGAJ/10378/2013 de fecha 06 de Agosto del año en curso, se envió un alcance de información al peticionario, proporcionada por la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (Se anexa copia simple del oficio de referencia para mejor proveer) así como del acuse de envió de la información por correo electrónico.

De conformidad con los antecedentes que preceden, resulta conveniente señalar a ese H. Pleno, los siguientes:

AMPLIACIÓN DE ALEGATOS

UNICO: En relación a los argumentos vertidos por el hoy recurrente, se señala lo siguiente:

La Unidad de Enlace en todo momento ha cumplido con los extremos de la Ley al proporcionar al ciudadano una respuesta adecuada y apegada a derecho.

Además, cabe precisar que la información que obra en el expediente de averiguación previa, tiene el carácter de reservado, tal y como lo dispone el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos

Penales en relación con el artículo 14 fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

En consecuencia se debe también desechar el recurso de revisión por ser notoriamente improcedente de conformidad con lo previsto en el artículo 58 fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los preceptos legales antes mencionados se considera viable que el H. Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección a Datos Personales, tenga a bien a confirmar la respuesta otorgada por esta Procuraduría General de la República, a través de su oficio SJA/DGAJ/10378/2013.

Por lo expuesto y fundado, atentamente solicito a usted H. Comisionado:



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

PRIMERO.- En atención a las consideraciones señaladas en el presente curso, se tome en cuenta lo expuesto en líneas anteriores.

SEGUNDO.- Tenga por cumplida la formulación y entrega de ampliación de alegatos y en tal virtud, solicito tome en cuenta lo expuesto en líneas anteriores.

TERCERO.- En su oportunidad, previos los trámites previstos por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, se proceda a resolver en términos del artículo 58, fracción II Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

[...]

Adjunto al alcance anterior, la Procuraduría General de la República anexó el oficio número SJA/DGAJ/10378/2013, de fecha 06 de agosto de 2013, mismo que es del tenor literal siguiente:

[...]

Con fundamento en lo establecido por los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 4, 28 fracciones II, IV, 41, 43, 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 de su Reglamento; así como el artículo 49 fracción XV del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en alcance al oficio SJA/DGAJ/886412013 de fecha 11 de junio del año en curso, se hace de su conocimiento que bajo el principio de máxima publicidad y búsqueda exhaustiva, contemplado en el artículo 6 Constitucional, la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, en alcance a su respuesta manifestó lo siguiente:

"Con relación a los hechos en Cadereyta en mayo de 2012, nos encontramos imposibilitados para proporcionar la información solicitada, en virtud de que la misma se encuentra clasificada como reservada, en términos de lo señalado en las fracciones I y III, del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y en relación a lo estipulado por el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Asimismo, en términos generales cabe mencionar que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, inició e integra una averiguación previa por los restos de los cuerpos humanos localizados en Cadereyta, Nuevo León, en mayo de 2012." (Sic).

Ahora bien, si usted tiene alguna duda sobre la respuesta otorgada, puede acudir a esta Unidad de Enlace de Acceso a la Información, ubicada en Río Guadiana No. 31, Planta Baja, Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06500, en México, Distrito Federal, o llamar al teléfono (55) 5346 0000, Ext. 5716 y 5717; o bien, escribanos al correo leydetransparencia@pgr.gob.mx, en donde con gusto atenderemos sus dudas y/o comentarios.

[...]



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

De igual manera, se anexó el oficio DENL/4518/2013, de fecha 06 de agosto de 2013, emitido por la Delegación Estatal Nuevo León, a través del cual se señala lo siguiente en relación con el folio que nos ocupa:

[...]

6.- Folio 0001700104513:

"Con base en el art 6, solicito los documentos que contengan información sobre las acciones realizadas para poner a disposición de los familiares información sobre el progreso de la investigación en el caso de los 49 cuerpos encontrados en Cadereyta, Nuevo León en mayo de 2012, el caso de las 72 personas migrantes encontradas en San Fernando, Tamaulipas el 25 de agosto de 2010 y en el caso de 193 cuerpos encontrados en fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas en marzo/abril de 2011." (Sic)

Respuesta:

Nos encontramos imposibilitados para proporcionar la información solicitada, en virtud de que la misma se encuentra clasificada como reservada, en términos de lo señalado en las fracciones I y III del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y en relación a lo estipulado por el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales.

...
Asimismo, en términos generales, cabe mencionar que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, inició e integra una averiguación previa por los restos de los cuerpos humanos localizados en Cadereyta, Nuevo León, en mayo de 2012; sin embargo se hace la aclaración que en la Agencia del Ministerio Público de la Federación con sede en Guadalupe, Nuevo León, se integra la indagatoria. (Sic)

[...]

CONSIDERANDOS

Primero. El Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos es competente para conocer del presente asunto de conformidad con lo previsto en los artículos 37, fracción II, 49, 50 y 55, fracción V de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 11 de junio de 2002; 88 y 89 del *Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 11 de junio de 2003; 15, fracciones I y III, 21 fracciones III y IV del *Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos*, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 29 de octubre de 2012; 2º, 3º y 4º del *Decreto del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública*, publicado en el *Diario*



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2002, así como el *Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares* y se reforman los artículos 3, fracciones II y VII, y 33, así como la denominación del Capítulo II, del Título Segundo de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, por el que se modifica la denominación de este Instituto, por el de Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 05 de julio de 2010.

Segundo. En su solicitud de acceso a la información, la particular requirió a la Procuraduría General de la República, mediante la modalidad de entrega a través del Infomex, los documentos que contuvieran información sobre las acciones realizadas para poner a disposición de los familiares información sobre el progreso de la investigación respecto de los casos de los 49 cuerpos encontrados en Cadereyta, Nuevo León, de los 72 migrantes encontrados en San Fernando, Tamaulipas el 25 de agosto de 2010 y del caso de 193 cuerpos localizados en fosas clandestinas en San Fernando, en 2011.

En respuesta, el sujeto obligado, manifestó que en observancia al principio de máxima publicidad, se hacía de su conocimiento que existía información en relación a su solicitud que se encuentra disponible públicamente en el Sistema de Solicitudes de Información (Infomex), por lo anterior se le indicó a la particular consultar la dirección electrónica <https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action> donde tendría que seleccionar el apartado correspondiente a "Consulta Pública de Solicitudes" e ingresar el número de folio 0001700160811.

De igual manera, se le hizo de su conocimiento que la información que es pública se encuentra disponible en la página de Internet de la Institución en www.pgr.gob.mx en los siguientes Boletines de Prensa:

- 1040/10 de fecha 29 de agosto de 2010.
- 1050/10 de fecha 01 de septiembre de 2010.
- 1051/10 de fecha 01 de septiembre de 2010.
- 1063/10 de fecha 05 de septiembre de 2010.
- 1189/10 de fecha 16 de octubre de 2010.
- 093/11 de fecha 31 de enero de 2011.
- 1568/11 de fecha 14 de noviembre de 2011.
- 214/12 de fecha 13 de mayo de 2012.



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

Inconforme con la respuesta, la particular interpuso ante este Instituto el presente recurso de revisión, mediante el cual se inconformó por la respuesta otorgada por parte del sujeto obligado, argumentando que dicha respuesta de la autoridad es notoriamente incompleta, inservible y no se refiere con especificidad a la información requerida.

Respecto a lo anterior, la recurrente señaló que, si bien el 8 de septiembre de 2011 ingresó la solicitud con número de folio 0001700160811, misma a la que hace mención el sujeto obligado en su respuesta, también lo es que en dicha solicitud únicamente pedía información respecto de los hechos ocurridos en San Fernando, Tamaulipas en agosto de 2011, siendo que en la presente solicita información sobre dos eventos nuevos, mismos que se señalan en la propia solicitud que nos ocupa.

Por otra parte, la recurrente señaló que los boletines de prensa citados por la Procuraduría General de la República no hacen referencia al tema requerido en la solicitud de mérito.

Motivo de lo anterior, la recurrente manifestó que en ningún momento ni bajo ninguna circunstancia se realizó un ejercicio exhaustivo para cumplir con las reglas de máxima publicidad, máxima divulgación y máxima disponibilidad de la información solicitada.

Una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación y notificadas que fueron las partes, la Procuraduría General de la República remitió a este Instituto su oficio de alegatos, por virtud del cual, a través de su Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, reiteró su respuesta inicial, señalando que se otorgó la respuesta conforme a las facultades que le otorga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, asimismo indicó a la hoy recurrente que la información solicitada es considerada como pública y la misma se encuentra disponible en la página de Internet de la Institución en www.pgr.gob.mx en los Boletines de Prensa 1040/10, 1050/10, 1051/10, 1063/10, 1189/10, 093/11, 1568/11 y 214/12, además se le remitió a consultar el Sistema de Solicitudes de Información (Infomex), donde deberá seleccionar el apartado correspondiente a "Consulta Pública de Solicitudes" e ingresar el número de folio 0001700160811, documentos con lo que se dio respuesta a su solicitud de información.



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

De igual manera, el sujeto obligado manifestó que se debía desechar el recurso de revisión por ser notoriamente improcedente de conformidad con lo previsto en el artículo 58, fracción III de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*.

Asimismo, la ahora recurrente remitió a este Instituto su escrito de alegatos, a través de los cuales realizó las siguientes manifestaciones:

- La Procuraduría General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, ha abierto por lo menos cuatro averiguaciones previas y actas circunstanciadas con motivo de los eventos referidos en mi solicitud (PGR/TAMPS /MAT-III/2194/2010, PGR/SIEDO/UEIS/197/2011, PGR/SIEDO/UETMIO/067/2011 y AC/PGR/NL/GPE-J/529/D/2012).
- De acuerdo con el Artículo 20 constitucional inciso C fracción I, son derechos de la víctima: recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal.
- Es obligación del Ministerio Público proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito, garantizando los derechos que en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Finalmente, la Procuraduría General de la República remitió un alcance a su escrito de alegatos, a través del cual manifestó que en relación con los hechos suscitados en Cadereyta en Mayo de 2012 se encontraban imposibilitados para proporcionar la información solicitada, en virtud de que la misma se encontraba clasificada como reservada de conformidad con lo señalado en las fracciones I y III del artículo 14 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental* y en relación con lo estipulado por el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Asimismo, el sujeto obligado señaló que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, inició e integró una averiguación previa por los restos de los cuerpos humanos localizados en Cadereyta, Nuevo León, en mayo de 2012; sin embargo, aclaró que en la Agencia del Ministerio Público de la Federación con sede en Guadalajara, Nuevo León, se integra la indagatoria.



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

Establecida así la controversia, la presente resolución tendrá por objeto, determinar si es procedente la respuesta señalada por el sujeto obligado, lo anterior, de conformidad con la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, su Reglamento y demás disposiciones normativas aplicables.

Tercero. En este considerando se analizará si resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión, por ser una cuestión de previo y especial pronunciamiento.

La Procuraduría General de la república, en su oficio de alegatos, solicitó a este Instituto sobreseer el presente recurso por ser improcedente de conformidad con lo previsto en el artículo 58, fracción III, de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*.

Al respecto, en el artículo 58, fracción III de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, se prevé que cuando admitido el recurso de impugnación aparezca alguna causal de improcedencia, el mismo será sobreseído.

Por otra parte, en el artículo 57 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, se prevé:

"Artículo 57. El recurso será desechado por improcedente cuando:

- I. Sea presentado, una vez transcurrido el plazo señalado en el Artículo 49;
- II. El Instituto haya conocido anteriormente del recurso respectivo y resuelto en definitiva;
- III. Se recurra una resolución que no haya sido emitida por un Comité, o
- IV. Ante los tribunales del Poder Judicial Federal se esté tramitando algún recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente."

Es importante mencionar que las causales de improcedencia previstas en el artículo 57 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, resultan aplicables antes de admitir a trámite el medio de impugnación, en virtud de que la consecuencia jurídica de que se configure alguna de estas causales es el desechamiento del recurso; en ese sentido, en el supuesto de que se configurara alguna de la hipótesis normativas previstas en el citado precepto legal, la figura jurídica aplicable sería, en todo caso, el sobreseimiento, entendido éste como la resolución por la cual se declara que existe un obstáculo



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

jurídico o de hecho que impide la decisión sobre el fondo de la controversia; lo anterior, con base en el artículo 58, fracción III del citado ordenamiento legal.

Al respecto, vale la pena señalar que de los Boletines de prensa señalados por el sujeto obligado no se desprende lo solicitado por el particular, motivo de lo anterior, el sobreseimiento solicitado por el sujeto obligado no resulta procedente.

Cuarto. En este considerando se analizará la normatividad aplicable a la materia de la solicitud que nos ocupa, así como la información pública relacionada con la misma.

En la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, se establece:

"Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

(...)

B. De los derechos de toda persona imputada:

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa;

II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;

III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el

Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador.

La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada;



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar**

IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley;

V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo.

En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculcado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra;

VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso.

El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarle. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa;

VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;

VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y

IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.

En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención.

C. De los derechos de la víctima o del ofendido:

I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;

II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;

III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.

La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;

V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.

El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y

VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.

Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.

El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se registrará



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

(...)

Artículo 102.

A. La ley organizará el Ministerio Público de la Federación, cuyos funcionarios serán nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva. El Ministerio Público de la Federación estará presidido por un Procurador General de la República, designado por el Titular del Ejecutivo Federal con ratificación del Senado o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Para ser Procurador se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso. El procurador podrá ser removido libremente por el Ejecutivo.

Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine.

El Procurador General de la República intervendrá personalmente en las controversias y acciones a que se refiere el artículo 105 de esta Constitución.

En todos los negocios en que la Federación fuese parte; **en los casos de los diplomáticos y los cónsules generales y en los demás en que deba intervenir el Ministerio Público de la Federación, el Procurador General lo hará por sí o por medio de sus agentes.**

El Procurador General de la República y sus agentes, serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.

La función de consejero jurídico del Gobierno, estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal que, para tal efecto, establezca la ley.

(...)"

[Énfasis añadido]



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

En la *Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República*, se establece lo siguiente:

“Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto organizar la Procuraduría General de la República, ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público de la Federación y al Procurador General de la República le atribuyen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este ordenamiento y demás disposiciones aplicables.

La Procuraduría General de la República, ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, ejercerá sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común. La actuación de sus servidores se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos.

Artículo 2. Al frente de la Procuraduría General de la República estará el Procurador General de la República, quien presidirá al Ministerio Público de la Federación.

Artículo 3. El Procurador General de la República intervendrá por sí o por conducto de agentes del

Ministerio Público de la Federación en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y las demás disposiciones aplicables.

(...)

Artículo 4. Corresponde al Ministerio Público de la Federación:

(...)

B) Ante los órganos jurisdiccionales:

(...)

b) Solicitar las medidas cautelares que procedan, en términos de la legislación aplicable, así como la constitución de garantías para los efectos de la reparación del daño;

c) Poner a disposición de la autoridad judicial a las personas detenidas dentro de los plazos establecidos por la ley;



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

d) Aportar las pruebas y promover las diligencias conducentes para la debida comprobación de la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiares del inculpado, de la responsabilidad penal, de la existencia de los daños y perjuicios, así como para la fijación del monto de su reparación;

(...)

C) En materia de atención y seguridad a la víctima o el ofendido por algún delito:

a) Proporcionar asesoría jurídica a la víctima u ofendido e informarle de los derechos que en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, cuando lo solicite, sobre el desarrollo del procedimiento penal;

b) Recibir todas aquellas pruebas que presente la víctima u ofendido, que considere que ayuden a acreditar el cuerpo del delito de que se trate, la probable responsabilidad del indiciado y la procedencia y cuantificación por concepto de reparación del daño, fundando y motivando la recepción o negativa de las mismas;

c) Ordenar la práctica de las diligencias conducentes en la investigación que soliciten la víctima o el ofendido o, en su caso, fundar y motivar su negativa;

d) Otorgar las facilidades para identificar al probable responsable y dictar todas las medidas necesarias para evitar que se ponga en peligro la integridad física y psicológica de la víctima u ofendido;

e) Informar a la víctima u ofendido que desee otorgar el perdón en los casos procedentes, el significado y trascendencia jurídica de dicho acto;

f) Dictar las medidas necesarias y que estén a su alcance para que la víctima u ofendido reciba atención médica y psicológica de urgencia. Cuando el Ministerio Público de la Federación lo estime necesario, tomará las medidas conducentes para que la atención médica y psicológica se haga extensiva a otras personas;

g) Solicitar a la autoridad judicial, en los casos en que sea procedente, la reparación del daño;

(...)

Artículo 9. El Procurador General de la República ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el personal de la Procuraduría General de la República.



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

El Procurador General de la República emitirá los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas administrativas necesarias que rijan la actuación de las unidades administrativas y órganos técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, de la Procuraduría General de la República, así como de agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial, oficiales ministeriales, visitantes y peritos.

(...)

Artículo 10. Para el despacho de los asuntos que competen a la Procuraduría General de la República y al Ministerio Público de la Federación conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presente ordenamiento y demás disposiciones aplicables, el Procurador General de la República se auxiliará de:

(...)

IX. Agregados;

(...)

Artículo 19. Los coordinadores, titulares de unidad y de órganos desconcentrados, directores generales, delegados y agregados deberán reunir los requisitos que se establezcan en el reglamento de esta ley y demás disposiciones aplicables, y serán designados y removidos libremente por el Procurador General de la República.

(...)"

[Énfasis añadido]

En el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se dispone lo siguiente:

"Artículo 2. Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

I. Agregados: Titulares de las agregadurías legales y regionales de la Procuraduría en el extranjero;

(...)

Artículo 3. Para el cumplimiento de los asuntos competencia de la Procuraduría, de su Titular y del Ministerio Público de la Federación, la Institución contará con las unidades administrativas y órganos desconcentrados siguientes:



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

A) Subprocuradurías:

I. Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales;
(...)

**V. Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la
Comunidad;**
(...)

G) Coordinaciones:

(...)
III. Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías, y
(...)

H) Direcciones Generales:

(...)
V. Dirección General de Procedimientos Internacionales;
VI. Dirección General de Cooperación Internacional;
(...)
**XV. Dirección General de Atención y Seguimiento a Recomendaciones y
Conciliaciones en Materia de Derechos Humanos;**
(...)

I) Órganos desconcentrados:

(...)
VI. Agregadurías Legales, Regionales y Oficinas de Enlace.
(...)

Artículo 4. Son agentes del Ministerio Público de la Federación:

(...)
j) De Procedimientos Internacionales;



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

(...)

XIII. Aquellos servidores públicos a los que el Procurador confiera dicha calidad mediante Acuerdo.

(...)

Artículo 14. Al frente de cada Subprocuraduría habrá un Subprocurador, quien será nombrado en términos del artículo 18 de la Ley Orgánica y tendrá las facultades siguientes:

I. En el ámbito de su competencia, fortalecer los mecanismos de cooperación y colaboración con autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, atendiendo a las normas aplicables y políticas institucionales, conforme a los lineamientos que emita el Procurador;

(...)

III. Participar, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes de la Institución, en la formulación de anteproyectos de iniciativas de leyes, tratados internacionales, acuerdos interinstitucionales, decretos, reglamentos, y demás instrumentos normativos que se relacionen con los asuntos materia de su competencia;

IV. Organizar, coordinar, dirigir y evaluar las unidades administrativas que le estén adscritas;

V. Acordar con el Procurador el despacho de los asuntos de su competencia, así como las políticas, estrategias y líneas de acción, para combatir los delitos materia de su competencia;

(...)

Artículo 46. Al frente de la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías habrá un Titular, quien tendrá las facultades siguientes:

I. Coordinar el ejercicio de las atribuciones del Ministerio Público de la Federación en materia internacional;

II. Coordinar a las agregadurías y oficinas de enlace;

(...)

IV. Coordinar la intervención de la Procuraduría en los procedimientos internacionales;



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

V. Coordinar el ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 4 de la Ley Orgánica y demás disposiciones constitucionales y legales aplicables, respecto de los delitos cometidos en el extranjero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Código Penal Federal, así como en los casos en que se encuentren involucrados diplomáticos, cónsules generales o miembros de organismos internacionales, cuando no existan inmunidades diplomáticas que respetar, velando por el estricto cumplimiento de la Constitución, los tratados internacionales de los que México sea parte y demás ordenamientos legales aplicables;

(...)

X. Coordinar el desahogo y atención de los asuntos competencia de la Procuraduría con mecanismos y organismos internacionales de derechos humanos;

XI. Establecer los mecanismos necesarios para que las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución se sujeten a los lineamientos que defina el Procurador en el cumplimiento de las funciones de la Procuraduría en el ámbito internacional, y

XII. Desahogar las consultas jurídicas internacionales que le sean formuladas por las unidades administrativas u órganos desconcentrados de la Institución, así como por otras autoridades federales, del Distrito Federal y de los Estados de la República, relacionadas con el ámbito de sus funciones.

(...)

Artículo 52. Al frente de la Dirección General de Procedimientos Internacionales habrá un Director

General, quien tendrá las facultades siguientes:

I. Intervenir en los casos de extradición internacional, conforme con lo dispuesto por el artículo

119 de la Constitución, los tratados internacionales en la materia de los que México sea parte, la Ley de Extradición Internacional, la Ley Orgánica y demás disposiciones aplicables;

II. Participar en los casos en que se reconozca la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, en el ámbito de competencia de la Procuraduría, conforme a lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución, los instrumentos internacionales en la materia de los que México sea parte, la

Ley Orgánica y demás disposiciones aplicables;



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

(...)

V. Realizar el análisis jurídico de la legislación extranjera en las materias penal y procesal penal, así como de los instrumentos jurídicos internacionales en materia de extradición, asistencia jurídica internacional, recuperación de activos y otros en el ámbito de competencia de la Procuraduría;

VI. Establecer, en coordinación con las autoridades competentes, canales de comunicación y mecanismos de cooperación con autoridades extranjeras y organismos internacionales, para realizar actividades en materia de extradición, asistencia jurídica internacional, recuperación de activos y otros en el ámbito de competencia de la Procuraduría;

VII. Colaborar en el cumplimiento de acuerdos y tratados internacionales relacionados con asistencia jurídica internacional, extradición, devolución de bienes, recuperación de activos, ejecución de sentencias penales y demás asuntos de carácter internacional que competan a la Procuraduría, y

VIII. Auxiliar en la práctica de diligencias y obtención de información en el extranjero, a las distintas unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución, así como a las procuradurías generales de justicia o instituciones análogas de los estados y del Distrito Federal.

(...)

Artículo 53. Al frente de la Dirección General de Cooperación Internacional habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:

(...)

VIII. Participar, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes de la Institución, en la implementación de las medidas institucionales para la atención de los requerimientos, visitas, medidas cautelares y recomendaciones formuladas por mecanismos y organismos internacionales de derechos humanos, y

IX. Desahogar las consultas jurídicas internacionales que le sean formuladas por las unidades administrativas de la Institución, así como por otras autoridades federales, del Distrito Federal y de los Estados de la República, relacionadas con el ámbito de sus funciones.

(...)



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

Artículo 62. Al frente de la Dirección General de Atención y Seguimiento a Recomendaciones y

Conciliaciones en materia de Derechos Humanos habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:

(...)

III. Atender por parte de la Institución, en términos de las disposiciones legales aplicables, los

Programas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, relacionados con la procuración de justicia;

IV. Coadyuvar con la Dirección General de Cooperación Internacional en el seguimiento a los acuerdos tomados por las instancias de coordinación para la atención de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los que México sea parte, y

V. Atender y dar seguimiento, en coordinación con las autoridades correspondientes, los requerimientos, visitas, medidas cautelares y recomendaciones que los organismos internacionales de derechos humanos realicen, respecto de casos que sean competencia de la Procuraduría.

(...)

Artículo 104. La Procuraduría contará con agregadurías legales, agregadurías regionales y oficinas de enlace, que serán órganos desconcentrados, coordinados por el Titular de la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías.

Las agregadurías contarán con Agregados, Agregados adjuntos, asistentes legales y asistentes administrativos, de acuerdo con las necesidades del servicio y a las disponibilidades presupuestales.

Los agregados, agregados adjuntos, titulares de las oficinas de enlace y el personal que preste sus servicios en esas áreas y que cuenten con pasaporte diplomático expedido por el estado Mexicano a instancia de esta Institución, serán designados y removidos en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica, y serán personal asimilados del Servicio exterior Mexicano.

Las oficinas de enlace contarán con el personal necesario para el desempeño de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto por el Procurador.



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

Artículo 105. El Procurador determinará el número de agregadurías legales, agregadurías regionales y oficinas de enlace, así como la circunscripción territorial de su competencia.

Artículo 106. Al frente de cada agregaduría legal habrá un Agregado, quien tendrá las facultades siguientes:

I. Fungir como representante de la Procuraduría ante las autoridades extranjeras de su circunscripción con las que deba tener comunicación en virtud de las funciones propias de la Institución;

II. Supervisar las actividades de las agregadurías regionales y oficinas de enlace dentro de la circunscripción de su competencia;

III. Auxiliar a las unidades administrativas y coordinarse con los órganos desconcentrados de la Institución, para el ejercicio de sus funciones;

IV. Llevar a cabo, en su circunscripción y con pleno respeto al marco jurídico aplicable, las acciones necesarias para la atención de los asuntos que le sean encomendados;

(...)

IX. Acordar los asuntos de su competencia con el Titular de la representación diplomática o consular o misión especial, guardando la debida reserva de los asuntos que así lo ameriten, de conformidad con las normas y políticas institucionales, y

(...)

Artículo 107. Al frente de cada agregaduría regional habrá un Agregado, quien tendrá las facultades siguientes:

I. Fungir como representante de la Procuraduría ante las autoridades extranjeras de su circunscripción con las que deba tener comunicación en virtud de las funciones propias de la

Institución;

II. Coordinarse con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución, para el ejercicio de sus funciones;

(...)

IV. Llevar a cabo, en su circunscripción y con pleno respeto al marco jurídico aplicable, las acciones necesarias para la atención de los asuntos que le sean encomendados;



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

(...)

IX. Acordar los asuntos de su competencia con el Titular de la representación diplomática o consular o misión especial, guardando la debida reserva de los asuntos que así lo ameriten, de conformidad con las normas y políticas institucionales, y

(...)

Artículo 108. Al frente de cada oficina de enlace habrá un Titular, quien tendrá las facultades siguientes:

I. Coordinar y dar seguimiento al intercambio de información con la o las agencias de enlace en las que esté acreditado;

II. Acordar los asuntos de su competencia con el Coordinador de Asuntos Internacionales y

Agregadurías;

(...)

VI. Apoyar a la Procuraduría en el desahogo de diligencias cuando le sea solicitado por la

Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías, y

(...)"

[Énfasis añadido]

A mayor abundamiento y en relación la normatividad citada, el Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República¹, establece lo siguiente:

VII. ESTRUCTURA ORGANICA

...

SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, ATENCION A VICTIMAS Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

¹ Consultado el 11 de junio de 2013 en: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n157.pdf, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2013.



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

Dirección General de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Atención a
Quejas e Inspección

Dirección General de Atención a Recomendaciones y Amigables Conciliaciones en
Derechos Humanos

Dirección General de Atención a Víctimas del Delito

Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad

...

SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, ATENCION A VICTIMAS Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

OBJETIVO:

Dictar medidas y lineamientos que permitan verificar y vigilar que la actuación sustantiva de la **Institución se apegue a los derechos humanos y garantías individuales** que señala la Constitución, así como fijar las políticas de atención a las víctimas u ofendidos por la comisión de delitos federales y promover la participación ciudadana que apoye a las funciones institucionales.

FUNCIONES:

Conducir y evaluar las actividades de las Unidades Responsables sobre la **protección de los derechos humanos, seguimiento de recomendaciones, atención a víctimas, prevención del delito** y servicios a la comunidad, con el propósito de determinar con la oportunidad debida, las medidas correctivas y/o preventivas que procedan;

DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA CULTURA EN DERECHOS HUMANOS, ATENCION A QUEJAS E INSPECCION

OBJETIVO:

Conducir y evaluar los trabajos de capacitación, difusión y fomento de la cultura de los derechos humanos en los servidores públicos de la Institución; **así como atender las quejas que presente la ciudadanía** o que se deriven de las visitas de inspección, en apego a la normatividad aplicable y **con pleno respeto a los derechos humanos**.

FUNCIONES:

Intervenir en el establecimiento de las políticas institucionales sobre la capacitación y promoción de la cultura en derechos humanos;



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

Fortalecer y difundir las leyes y tratados, nacionales e internacionales que protegen los derechos humanos, para celebrar convenios y bases de colaboración que permitan capacitar, promover y difundir su debido respeto en toda actuación del Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares;

Colaborar en las investigaciones, **resoluciones y seguimiento de las quejas que presente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos** y proporcionar las facilidades necesarias en las visitas de inspección que se realicen en la Procuraduría,

Instruir al personal que corresponda, sobre la debida atención y seguimiento de las medidas cautelares que solicite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

Dirigir las acciones de revisión, análisis y resolución de las quejas e inconformidades que la ciudadanía presenta en contra de los servidores públicos de la Institución, en relación al respeto, protección y observancia de los derechos humanos;

DIRECCION GENERAL DE ATENCION A RECOMENDACIONES Y AMIGABLES CONCILIACIONES EN DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO:

Planear y conducir las actividades relativas a la atención de las recomendaciones y propuestas de conciliaciones que provengan de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organismos estatales con funciones similares, sobre la actuación de los servidores públicos de la Institución, de conformidad a la normatividad aplicable, para preservar su pleno respeto, así como de las garantías individuales que establece la Constitución.

FUNCIONES:

Instruir sobre la atención de las propuestas de conciliación y las recomendaciones que turna a esta Institución, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como controlar y dar seguimiento a éstas, hasta su resolución;

...

Intervenir, en el ámbito de su competencia en el ejercicio de las atribuciones que confiere la Ley Orgánica de la Institución al Ministerio Público de la Federación, **en la recepción de quejas y denuncias por acciones y omisiones que puedan constituir delito;**



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

Intervenir en la integración de averiguaciones previas que se aperturen a servidores públicos de la Institución, por recomendaciones que turne la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como resolver y dar seguimiento a los procesos de conciliación;

De la normatividad citada, es posible desprender que para la procuración de justicia federal eficaz la Procuraduría General de la República cuenta con diversas en Subprocuradurías, a las cuales se adscriben Direcciones entre las que se encuentran las siguientes:

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad

Dirección General de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Atención a Quejas e Inspección.

Dirección General de Atención a Recomendaciones y Amigables Conciliaciones en Derechos Humanos.

Dirección General de Atención a Víctimas del Delito.

Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.

En el Acuerdo número A/304/09, publicado el 17 de septiembre de 2009 en el *Diario Oficial de la Federación*, por el cual se establece la organización y funcionamiento de las agregadurías legales, agregadurías regionales y oficinas de enlace de la PGR en el exterior, se establece lo siguiente:

"PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las bases de organización, sobre las cuales funcionarán las agregadurías de la Procuraduría General de la República en los países en que se encuentran acreditadas.

SEGUNDO. Las agregadurías de la Procuraduría General de la República podrán ser legales o regionales y compondrán un sistema integral, considerando dentro de éste a las oficinas de enlace. Dichas unidades administrativas podrán conformarse por agregados legales, agregados regionales, agregados adjuntos, titulares de las oficinas de enlace, asistentes legales y asistentes administrativos de acuerdo a las necesidades del servicio.

(...)



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

SEXTO. Las agregadurías legales, agregadurías regionales y oficinas de enlace dependerán directamente de la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías.

Los agregados legales, agregados regionales, agregados adjuntos y titulares de oficina de enlace, serán representantes del Ministerio Público de la Federación y estarán sujetos a las mismas obligaciones que los miembros del personal de carrera del Servicio Exterior, en los términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano; salvo en los casos en que deban guardar reserva de información con motivo del ejercicio propio de sus funciones.

Para los efectos de este Acuerdo se entenderá como:

I. PROCURADOR: Al Procurador General de la República;

II. SUBPROCURADOR: Al Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales;

III. COORDINADOR: Al Coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías;

IV. AGREGADO LEGAL: Es el titular de la oficina que representa a la Procuraduría General de la República en el extranjero, de mayor nivel jerárquico, que podrá ser acreditado en la capital de un Estado extranjero, adscrito a la Embajada de México, o no, atendiendo a las necesidades del servicio y con responsabilidad en el territorio que mediante este instrumento, o cualquier otra disposición normativa, le sea asignado, pudiendo estar acreditado también ante otros países;

V. AGREGADO REGIONAL: Es el titular de la oficina de apoyo de la Agregaduría Legal, con subordinación inmediata a éste y con acreditación a uno o más consulados de México y tiene por objeto realizar sus funciones en un área geográfica extensa y determinada por este acuerdo y está acreditada ante autoridades nacionales y locales de esa región;

VI. TITULAR DE OFICINA DE ENLACE: Es el titular de la oficina de cooperación e intercambio de información con una o varias Agencias de enlace determinadas;

VII. AGREGADO ADJUNTO, SEA LEGAL O REGIONAL: Es el personal de apoyo y quien tendrá la representación de suplencia por ausencia del agregado legal o regional, según corresponda.

VIII. ASISTENTE LEGAL: Es el personal de apoyo sustantivo adscrito a la agregaduría;

IX. ASISTENTE ADMINISTRATIVO: Es el personal administrativo adscrito a la agregaduría, y



**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

X. CONSEJO ASESOR: Al Consejo Asesor en la designación y adscripción de delegados y subdelegados, agregados y subagregados de la Procuraduría General de la República, que establece el Acuerdo A/215/08 del Procurador, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2008.

(...)

SEPTIMO. Las agregadurías legales, regionales y oficinas de enlace, deberán informar de los asuntos que estén conociendo, al Coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías, así como al Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales y, en su caso, a los titulares de las unidades administrativas u órganos desconcentrados, de acuerdo con las facultades de dichas unidades u órganos desconcentrados y con estricto apego al sigilo en las investigaciones a que están obligados los servidores públicos de la Institución.

Lo anterior, sin menoscabo de los trámites e intercambios de información que en forma directa e indirecta se realicen entre las agregadurías u oficinas de enlace y las unidades administrativas u órganos desconcentrados de la institución.

(...)

DECIMO PRIMERO. Además de las previstas en el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, serán facultades genéricas de los agregados legales y regionales las siguientes:

I. Rendir los informes que le sean solicitados por su superior inmediato, particularmente respecto de temas trascendentales o relevantes.

(...)

III. Gestionar ante las autoridades competentes de su circunscripción, enlaces y apoyos en la investigación y persecución de delitos competencia de la Procuraduría General de la República, o en los que auxilie al fuero común;

IV. Participar activamente en todos los procedimientos de extradición que se desahoguen en su circunscripción, privilegiando la coadyuvancia con la autoridad administrativa y judicial competente, a efecto de obtener resoluciones favorables;

V. Participar y promover la resolución favorable de las peticiones de asistencia jurídica o técnica mutua;

(...)

XI. Coordinarse en asuntos de su competencia con el Embajador de México de su circunscripción;



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

XII. Difundir en el ámbito de su circunscripción territorial los programas, acciones y logros de la Institución;

(...)

XIV. Recibir directamente y/o en coordinación con los cónsules de su circunscripción, denuncias y querellas de posibles delitos en los que se encuentren involucrados ciudadanos mexicanos, remitiendo las mismas con las formalidades de ley a la unidad administrativa que resulte competente, para su trámite correspondiente; (...)"

[Énfasis añadido]

De los preceptos constitucionales transcritos se desprende lo siguiente:

- El proceso penal en México es acusatorio y oral, y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
- Son derechos de la víctima o del ofendido, entre otros, recibir asesoría jurídica, así como ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal. Asimismo, que se le repare el daño; en los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. Para estos efectos, la ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño.
- Le corresponde al Ministerio Público de la Federación la investigación de los delitos, así como el ejercicio de la acción penal ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; concretamente en materia de atención y seguridad a la víctima o el ofendido por algún delito, le corresponde, entre otras cosas, lo siguiente:
 1. Proporcionar asesoría jurídica a la víctima u ofendido e informarle de los derechos que en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, cuando lo solicite, sobre el desarrollo del procedimiento penal;



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

2. Recibir todas aquellas pruebas que presente la víctima u ofendido, que considere que ayuden a acreditar el cuerpo del delito de que se trate, la probable responsabilidad del indiciado y la procedencia y cuantificación por concepto de reparación del daño, fundando y motivando la recepción o negativa de las mismas, y
 3. Solicitar a la autoridad judicial, en los casos en que sea procedente, la reparación del daño.
- El titular de la PGR ejerce autoridad jerárquica sobre todo el personal adscrito a la Procuraduría, para lo cual éste podrá emitir los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas administrativas necesarias que rijan la actuación de las unidades administrativas y órganos técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, así como de agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la PF Ministerial, oficiales ministeriales, visitantes y peritos.
 - Para el cumplimiento de los asuntos de su competencia la PGR contará, entre otras unidades administrativas, con las siguientes:
 1. Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, la cual se apoyará de la:
 - a) Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías;
 - b) Dirección General de Procedimientos Internacionales, y
 - c) Dirección General de Cooperación Internacional.
 2. Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, la cual se apoyará de la Dirección General de Atención y Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones en Materia de Derechos Humanos.
 3. Las Agregadurías Legales, Regionales y Oficinas de Enlace.
 - Son facultades genéricas de las Subprocuradurías, entre otras, en el ámbito de su competencia, fortalecer los mecanismos de cooperación y colaboración con autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, atendiendo a las normas aplicables y políticas institucionales, conforme a los lineamientos que emita el Procurador, así como participar, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes de la Institución, en la formulación de



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

anteproyectos de iniciativas de leyes, tratados internacionales, acuerdos interinstitucionales, decretos, reglamentos, y demás instrumentos normativos que se relacionen con los asuntos materia de su competencia. Asimismo, organiza, coordina, dirige y evalúa las unidades administrativas que le estén adscritas. También, acuerda con el Procurador el despacho de los asuntos de su competencia, así como las políticas, estrategias y líneas de acción, para combatir los delitos materia de su competencia.

- Corresponde a la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías, entre otras funciones, las siguientes:
 1. Coordinar el ejercicio de las atribuciones del Ministerio Público de la Federación en materia internacional;
 2. Coordinar a las agregadurías y oficinas de enlace;
 3. Coordinar la intervención de la Procuraduría en los procedimientos internacionales;
 4. Coordinar el desahogo y atención de los asuntos competencia de la Procuraduría con mecanismos y organismos internacionales de derechos humanos;
 5. Desahogar las consultas jurídicas internacionales que le sean formuladas por las unidades administrativas u órganos desconcentrados de la Institución, así como por otras autoridades federales, del Distrito Federal y de los Estados de la República, relacionadas con el ámbito de sus funciones.
- Son facultades de la Dirección General de Procedimientos Internacionales, entre otras, las siguientes:
 1. Realizar el análisis jurídico de la legislación extranjera en las materias penal y procesal penal, así como de los instrumentos jurídicos internacionales en materia de extradición, asistencia jurídica internacional, recuperación de activos y otros en el ámbito de competencia de la Procuraduría;
 2. Establecer, en coordinación con las autoridades competentes, canales de comunicación y mecanismos de cooperación con autoridades extranjeras y organismos internacionales, para realizar actividades en materia de extradición, asistencia jurídica internacional, recuperación de activos y otros en el ámbito de competencia de la Procuraduría;



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

3. **Colaborar en el cumplimiento de acuerdos y tratados internacionales relacionados con asistencia jurídica internacional, extradición, devolución de bienes, recuperación de activos, ejecución de sentencias penales y demás asuntos de carácter internacional que competan a la Procuraduría, y**
 4. **Auxiliar en la práctica de diligencias y obtención de información en el extranjero, a las distintas unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución, así como a las procuradurías generales de justicia o instituciones análogas de los estados y del Distrito Federal.**
- **Corresponde a la Dirección General de Cooperación Internacional, entre otras atribuciones, participar, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes de la Institución, en la implementación de las medidas institucionales para la atención de los requerimientos, visitas, medidas cautelares y recomendaciones formuladas por mecanismos y organismos internacionales de derechos humanos, y desahogar las consultas jurídicas internacionales que le sean formuladas por las unidades administrativas de la Institución, así como por otras autoridades federales, del Distrito Federal y de los Estados de la República, relacionadas con el ámbito de sus funciones.**
 - **Son facultades de la Dirección General de General de Atención y Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones en materia de Derechos Humanos, entre otras, atender por parte de la Institución, en términos de las disposiciones legales aplicables, los Programas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, relacionados con la procuración de justicia, así como coadyuvar con la Dirección General de Cooperación Internacional en el seguimiento a los acuerdos tomados por las instancias de coordinación para la atención de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los que México sea parte. Asimismo, atiende y da seguimiento, en coordinación con las autoridades correspondientes, los requerimientos, visitas, medidas cautelares, y recomendaciones que los organismos internacionales de derechos humanos realicen, respecto de casos que sean competencia de la PGR.**
 - **La PGR contara con agregadurías legales, agregadurías regionales y oficinas de enlace, que serán órganos desconcentrados, coordinados por el Titular de la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías, los cuales serán representantes del Ministerio Público de la Federación, y**



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

estarán sujetos a las mismas obligaciones que los miembros del personal de carrera del Servicio Exterior, en los términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

- Le corresponde al titular de las agregadurías, entre otras funciones, las siguientes:
 1. Fungir como representante de la PGR ante las autoridades extranjeras de su circunscripción con las que deba tener comunicación en virtud de las funciones propias de la Institución;
 2. Supervisar las actividades de las agregadurías regionales y oficinas de enlace dentro de la circunscripción de su competencia;
 3. Auxiliar a las unidades administrativas y coordinarse con los órganos desconcentrados de la Institución, para el ejercicio de sus funciones;
 4. Llevar a cabo, en su circunscripción y con pleno respeto al marco jurídico aplicable, las acciones necesarias para la atención de los asuntos que le sean encomendados, y
 5. Acordar los asuntos de su competencia con el titular de la representación diplomática o consular o misión especial, guardando la debida reserva de los asuntos que así lo ameriten, de conformidad con las normas y políticas institucionales.
- Le corresponde a las agregadurías regionales, entre otras funciones, fungir como representante de la Procuraduría ante las autoridades extranjeras de su circunscripción con las que deba tener comunicación en virtud de las funciones propias de la Institución, así como llevar a cabo, en su circunscripción y con pleno respeto al marco jurídico aplicable, las acciones necesarias para la atención de los asuntos que le sean encomendados.
- Son funciones de las oficinas de enlace, entre otras, coordinar y dar seguimiento al intercambio de información con la o las agencias de enlace en las que esté acreditado, así como acordar los asuntos de su competencia con el Coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías; también, apoya a la PGR en el desahogo de diligencias cuando le sea solicitado por la citada coordinación.



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

Ahora bien, es importante recordar que la ahora recurrente requiere información relativa a la reparación del daño y mecanismos de seguimiento para los familiares de las víctimas de delitos; al respecto, en la *"Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder"* adoptada por la Asamblea General de la Organización de la Naciones Unidas, mediante resolución número 40/34, del 29 de noviembre de 1985, se establece lo siguiente:

"A.-Las víctimas de delitos

1. Se entenderá por 'víctimas' las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.

2. Podrá considerarse 'víctima' a una persona, con arreglo a la presente Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión 'víctima' se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

(...)

Acceso a la justicia y trato justo

4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. **Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional.**

5. **Se establecerá y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles.** Se informará a las víctimas de sus derechos para obtener reparación mediante esos mecanismos.

6. **Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas:**



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información;

b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente;

c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial;

d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia;

e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas.

7. Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación en favor de las víctimas.

Resarcimiento

8. Los delincuentes o los terceros responsables de su conducta resarcirán equitativamente, cuando proceda, a las víctimas, sus familiares o las personas a su cargo. Ese resarcimiento comprenderá la devolución de los bienes o el pago por los daños o pérdidas sufridos, el reembolso de los gastos realizados como consecuencia de la victimización, la prestación de servicios y la restitución de derechos.

9. Los gobiernos revisarán sus prácticas, reglamentaciones y leyes de modo que se considere el resarcimiento como una sentencia posible en los casos penales, además de otras sanciones penales.



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

10. En los casos en que se causen daños considerables al medio ambiente, el resarcimiento que se exija comprenderá, en la medida de lo posible, la rehabilitación del medio ambiente, la reconstrucción de la infraestructura, la reposición de las instalaciones comunitarias y el reembolso de los gastos de reubicación cuando esos daños causen la disgregación de una comunidad.

11. Cuando funcionarios públicos u otros agentes que actúen a título oficial o cuasioficial hayan violado la legislación penal nacional, las víctimas serán resarcidas por el Estado cuyos funcionarios o agentes hayan sido responsables de los daños causados. En los casos en que ya no exista el gobierno bajo cuya autoridad se produjo la acción u omisión victimizadora, el Estado o gobierno sucesor deberá proveer al resarcimiento de las víctimas. (...)"

[Énfasis añadido]

Como se desprende en el ámbito internacional, mediante la citada declaración se considera como víctima a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros (entre ellos incluido México), incluida la que proscribe el abuso de poder.

Las víctimas deberán ser tratadas con compasión y respeto a su dignidad, y tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional.

En relación con lo anterior, los estados facilitarán la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas, realizando, entre otras cosas, lo siguiente:

1. Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico, y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información;
2. Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial, y



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

3. Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares, y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia.

En relación con lo anterior, en la legislación interna se encuentra la Ley General de Víctimas, cuya última reforma fue publicada en el *Diario Oficial de la Federación*, el 3 de mayo de 2013, en la que se establece lo siguiente:

“Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1º, párrafo tercero, 17, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas.

La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral.

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante.

Artículo 2. El objeto de esta Ley es:

I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos;

II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral;



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

III. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso;

IV. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas;

V. Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión de cualquiera de sus disposiciones.

(...)

Artículo 4. Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.

Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.

Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.

(...)

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

(...)

XVII. Víctima: Persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito;

(...)

Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.

Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

I. A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones al Derecho Internacional de los derechos humanos, y a su reparación integral;

II. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron;

(...)

IX. A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre las rutas y los medios de acceso a los procedimientos, mecanismos y medidas que se establecen en la presente Ley;

(...)

XII. A conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que tenga un interés como interviniente;

(...)

XV. A que el consulado de su país de origen sea inmediatamente notificado conforme a las normas internacionales que protegen el derecho a la asistencia consular, cuando se trate de víctimas extranjeras;

XVI. A la reunificación familiar cuando por razón del tipo de victimización su núcleo familiar se haya dividido;

XVII. A retornar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad;

(...)

XIX. A ser beneficiaria de las acciones afirmativas y programas sociales públicos para proteger y garantizar sus derechos;

(...)

XXIV. A acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar la responsabilidad en la comisión del delito o de la violación de los derechos humanos;

XXV. A tomar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia o mecanismos alternativos;



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

(...)

Artículo 10. Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante las autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos sufridas por ellas; a que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; y a obtener una reparación integral por los daños sufridos.

Las víctimas tendrán acceso a los mecanismos de justicia de los cuales disponga el Estado, incluidos los procedimientos judiciales y administrativos. La legislación en la materia que regule su intervención en los diferentes procedimientos deberá facilitar su participación.

Artículo 11. Para garantizar los derechos establecidos en el artículo 10 de la presente Ley, las víctimas tendrán acceso a los mecanismos y procedimientos previstos en la Constitución, en las leyes locales y federales aplicables y en los Tratados Internacionales.

Artículo 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos:

I. A ser informadas de manera clara, precisa y accesible de sus derechos por el Ministerio Público o la primera autoridad con la que tenga contacto o que conozca del hecho delictivo, tan pronto éste ocurra. El Ministerio Público deberá comunicar a la víctima los derechos que reconocen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales y esta Ley a su favor, dejando constancia en la carpeta de investigación de este hecho, con total independencia de que exista o no un probable responsable de los hechos;

II. A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa en los términos a que se refiere el artículo 64 de esta Ley y de la legislación aplicable. En los casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no podrá absolver al responsable de dicha reparación. Si la víctima o su Asesor Jurídico no solicitaran la reparación del daño, el Ministerio Público está obligado a hacerlo;

III. A coadyuvar con el Ministerio Público; a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio como partes plenas ejerciendo durante el mismo sus derechos los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado. Asimismo, tendrán derecho a que se les otorguen todas las facilidades para la presentación de denuncias o querellas;

(...)



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

VII. A que se garantice su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor contra todo acto de amenaza, intimidación o represalia;

(...)

XIII. En los casos que impliquen graves violaciones a los derechos humanos, a solicitar la intervención de expertos independientes, a fin de que colaboren con las autoridades competentes en la investigación de los hechos y la realización de peritajes. Las organizaciones de la sociedad civil o grupos de víctimas podrán solicitar que grupos de esos expertos revisen, informen y emitan recomendaciones para lograr el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas.

(...)

Artículo 26. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.

Artículo 27. Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral comprenderá:

I. La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos;

II. La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos;

III. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos;

IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas;

V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir;

VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural



**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

colectivo que reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados.

(...)

Artículo 123. Corresponde al Ministerio Público, además de los deberes establecidos en el presente ordenamiento, lo siguiente:

I. Informar a la víctima, desde el momento en que se presente o comparezca ante él, los derechos que le otorga la Constitución y los tratados internacionales, el código penal y procesal penal respectivo y las demás disposiciones aplicables, así como el alcance de esos derechos, debiendo dejar constancia escrita de la lectura y explicación realizada;

(...)

V. Solicitar las pruebas conducentes a fin de acreditar, determinar y cuantificar el daño de la víctima, especificando lo relativo a daño moral y daño material, siguiendo los criterios de esta Ley;

(...)

VII. Solicitar la reparación del daño de acuerdo con los criterios señalados en esta Ley;

(...)"

[Énfasis añadido]

De lo anterior, se puede concluir lo siguiente:

- Es objeto de la Ley General de Víctimas, entre otros, establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades, y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas.
- Se considera a víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

- Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan relación inmediata con ella.
- Las víctimas tendrán, entre otros derechos, los siguientes:
 - a) A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos, y por los daños que esas violaciones les causaron;
 - b) A conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que tenga un interés como interviniente, y
 - c) A que el consulado de su país de origen sea inmediatamente notificado conforme a las normas internacionales que protegen el derecho a la asistencia consular, cuando se trate de víctimas extranjeras.
- Le corresponde al Ministerio Público en el marco de esta Ley, entre otras cosas, informar a la víctima, desde el momento en que se presente o comparezca ante él, los derechos que le otorga la Constitución y los tratados internacionales, el código penal, y procesal penal respectivo y las demás disposiciones aplicables, así como el alcance de esos derechos, debiendo dejar constancia escrita de la lectura, y explicación realizada. Asimismo, solicita las pruebas conducentes a fin de acreditar, determinar y cuantificar el daño de la víctima, especificando lo relativo a daño moral, y daño material.

Quinto. Una vez señalado lo anterior, este Instituto realizó una búsqueda de información pública, en relación con la solicitud de la recurrente, información que se analizará en el presente considerando.

En relación con los 49 cuerpos localizados en Cadereyta, se encontró lo siguiente:

En el periódico La Crónica del 14 de mayo de 2012², se localizó la siguiente nota:

² Disponible en <http://www.cronica.com.mx/notas/2012/660740.html>



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

"Hallan en Cadereyta, NL, a 49 personas decapitadas"

"Cuarenta y nueve cuerpos mutilados —43 varones y seis mujeres—, sin cabeza ni manos, fueron arrojados ayer en Cadereyta, Nuevo León, a un costado de la carretera a Reynosa, Tamaulipas, la mayoría dentro de bolsas de plástico de color negro y los demás al descubierto.

"[...]"

"El vocero de Seguridad Pública de Nuevo León, Jorge Domene, señaló que las víctimas al parecer eran miembros del crimen organizado, a juzgar por tatuajes que presentaban y un mensaje —cuyo contenido no fue divulgado— encontrado en el lugar.

"El funcionario señaló asimismo que, de acuerdo con las primeras indagaciones y datos periciales, la mayoría de los ejecutados habrían sido privados de la vida unas 48 horas antes, en otro lugar, y arrojados en el punto referido.

"El hallazgo generó gran movilización de todas las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, incluidos el Ejército y de la Policía Federal, las cuales cerraron la zona al tránsito de vehículos mientras se hacían las diligencias para el levantamiento de los cadáveres.

"La zona donde fueron arrojados los despojos es un despoblado y la tarea de levantamiento llevó unas cinco horas por parte del Servicio Médico Forense y peritos en criminalística de la Procuraduría General de Justicia.

"Los peritos se abocaron a la realización del análisis de los restos y las videncias recogidas en el lugar, pero a decir de las autoridades, la identificación de las víctimas será complicada debido a la mutilación de los cuerpos, por lo que serán sometidos a exámenes de ADN.

"El procurador estatal, Adrián De la Garza, informó que no se tienen reportes de secuestros masivos en los últimos días, por lo que se presume asimismo que las víctimas podrían ser personas de otros lados o hasta migrantes.

"[...]"

"Tras el hallazgo, el procurador de la Garza dijo que fue solicitado a la Federación mayor apoyo para realizar patrullajes en la zona y encontrar a los responsables de estos hechos "tan lamentables y crueles".

"Las corporaciones de seguridad instalaron retenes sobre la carretera mencionada, uno de éstos a la altura de la refinería de Pemex.

"[...]"

[Énfasis añadido]



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

De dicha nota se desprende que en Cadereyta fueron encontrados los cadáveres de 49 personas decapitadas, a un costado de la carretera Reynosa Tamaulipas. El hallazgo generó gran movilización de todas las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno. **La tarea de levantamiento llevó unas cinco horas por parte del Servicio Médico Forense y de los peritos en criminalística de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.**

Los peritos se abocaron a la realización del análisis de los restos y de las evidencias, pero se precisó que la identificación de las víctimas sería complicada por la mutilación de los cuerpos, por lo que serían sometidos a exámenes de ADN.

En el portal del internet del sujeto obligado se localizó el boletín de prensa 214/12, emitido por la Dirección de Comunicación Social, el 13 de mayo de 2012³:

SALA DE PRENSA

HECHOS DE VIOLENCIA NO QUEDARÁN IMPUNES

Domingo, 13 de Mayo de 2012 > Boletín 214/12

Ante los hechos registrados hoy sobre la carretera libre a Reynosa, en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, el Gobierno Federal condena con toda energía los hechos ahí acaecidos y señala:

La causa primordial de la violencia en México es la disputa entre organizaciones criminales por el control de rutas y mercados delictivos. En fechas recientes, existen indicios de que las organizaciones delictivas comandadas por Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera e Ismael "El Mayo" Zambada, así como por Heriberto Lazcano Lazcano, "El Lazca" y Miguel Treviño Morales, "El Z 40", han desatado, con apoyo de diversos criminales, episodios inhumanos e inadmisibles de violencia irracional en su disputa criminal.

Ante esta violencia indiscriminada que caracteriza la confrontación entre grupos de la delincuencia organizada, la respuesta gubernamental está fundada en la Estrategia Nacional de Seguridad mediante los Operativos Conjuntos y con el pleno apoyo y corresponsabilidad de las autoridades locales.

Es por ello que resulta necesaria una permanente colaboración entre las corporaciones encargadas de la seguridad pública en los ámbitos municipal y estatal en coordinación con la Federación, con el objetivo de llevar a estos delincuentes ante la justicia y recuperar la tranquilidad de la sociedad mexicana.

Al respecto, la Procuraduría General de la República mantiene su programa de recompensas por 30 millones de pesos para quienes proporcionen información útil y veraz sobre el paradero de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, Ismael "El Mayo" Zambada, Heriberto Lazcano Lazcano "El Lazca" y Miguel Treviño Morales, "El Z40", para ello se han dispuesto diversos mecanismos para dar información sobre estos delincuentes mediante el correo electrónico denunciapgr@pgr.gob.mx y en el número 01800 831 3196.

Ante el registro de episodios de violencia caracterizados por homicidios cruentos, como el ocurrido en Cadereyta, Nuevo León, el Gobierno Federal actuará con toda firmeza y fuerza para hacer justicia y que no haya impunidad.

Asimismo, y como en otros casos, el Gobierno Federal refrenda a las autoridades del estado de Nuevo León el respaldo subsidiario de la Federación para ir tras los culpables y detenerlos.

³ <http://www.pgr.gob.mx/Prensa/2007/bol12/May/b21412.shtm>



Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

El Gobierno Federal seguirá actuando de manera decidida en el combate contra la criminalidad que amenaza la seguridad de los neoleoneses y contribuirá a las investigaciones y acciones para llevar ante la justicia a los responsables de este repudiable hecho.

Diversos casos de violencia criminal han sido perseguidos por autoridades federales y han resultado en la detención de los delinquentes que tanto dañan a nuestras familias.

Por ejemplo, en el caso del hallazgo de fosas en San Fernando, Tamaulipas, más de 80 personas han sido llevadas ante la justicia, entre las que destacan 16 elementos de la policía municipal y Martín Omar Estrada Luna, alias "El Kilo", presunto jefe de plaza en la localidad, al servicio de la organización criminal de los Zetas.

Otro caso es la detención de José Antonio Acosta Hernández, alias "El Diego", presunto jefe de la organización criminal de Juárez. Acosta Hernández es presunto responsable de diversos hechos de violencia en Chihuahua.

Los crímenes cometidos en el Casino Royale, en Monterrey, han sido también perseguidos con todos los instrumentos que el Gobierno Federal tiene a su alcance. Más de 30 personas de 37 identificadas como presuntamente responsables de los lamentables hechos, se encuentran hoy ante la justicia. Entre ellas destaca Carlos Oliva Castillo, alias "La Rana", encargado del grupo criminal Los Zetas en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El Gobierno Federal reitera que solo mediante el compromiso firme de los distintos actores políticos, económicos y sociales, del fortalecimiento institucional, la contención criminal y la regeneración del tejido social, será posible alcanzar la seguridad y tranquilidad de nuestras comunidades.

De dicho comunicado, se desprende que la PGR asumió su permanente colaboración en los ámbitos municipal y estatal con el objetivo de llevar a los delinquentes del asesinato ocurrido en Cadereyta, Nuevo León ante la justicia.

Asimismo, señaló que como en otros casos, a nombre del gobierno federal, refrendó a las autoridades del estado de Nuevo León el respaldo subsidiario de la Federación para ir tras los culpables y detenerlos.

En el Periódico Milenio, se localizó la siguiente nota del 13 de mayo de 2012⁴:

"Suman 49 los cuerpos encontrados en Cadereyta, NL

Cadereyta Jiménez • En un caso sin precedente en la historia criminal de Nuevo León, 49 personas (entre ellas seis mujeres) fueron asesinadas y sus cuerpos decapitados encontrados a la orilla de la carretera libre a Reynosa.

El hallazgo de los cadáveres, fue reportado a las autoridades estatales y federales alrededor de las 02:00 horas de la madrugada del domingo.

Los restos estaban tirados y algunos en bolsas de plástico en color negro a la altura del kilómetro 47 de la carretera libre a Reynosa y el entronque al poblado San Juan.

Minutos después de que se confirmó la muerte de 49 personas, el despliegue de efectivos estatales, policía ministerial, elementos de la Policía Federal y Militares no se hizo esperar.

La zona del múltiple crimen fue acordonada por las Fuerzas Federales y la circulación de automóviles hacia la frontera con el estado de Tamaulipas fue cerrada a la vialidad. Durante siete horas, este tramo de la carretera fue bloqueada por patrullas estatales y del ejército, así mismo la vialidad de San Juan hacia la carretera a Reynosa fue suspendida.

⁴ Visible en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/951b856687d366273d2918c87e7f8f62>. Cabe destacar que notas similares se difundieron en la misma en otros medios de comunicación como El Universal y la Jornada.



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

Personal de servicios periciales de la Agencia Estatal de Investigaciones arribaron al lugar y comenzaron a levantar evidencias.

Los cuerpos fueron ubicados cerca de un terreno baldío y de una caseta de Inspección Sanitaria localizada a 20 metros del arco simbólico de la fundación del poblado cuna del béisbol nacional.

Durante las investigaciones llevadas a cabo por la policía, se presume que los cuerpos podrían pertenecer a migrantes, ya que algunos de ellos tenían facciones propias de estados al sur del país.

Asimismo se localizó un mensaje, cuya manta fue abandonada a unos 3 metros de los cuerpos; asimismo en el muro del lado poniente del arco fue inscrita la leyenda del grupo criminal que llevó a cabo el asesinato.

En la escena del crimen, los peritos localizaron algunos casquillos percutidos y revelaron que algunos de los cuerpos ya se encontraban en completo estado de putrefacción.

Esto lleva a la policía ministerial a presumir que en el lugar unas de estas personas fueron ejecutadas, pero otros pudieron ser llevados ya muertos al lugar.

Luego de las investigaciones, los restos de seis mujeres y 43 hombres fueron trasladados a tres unidades del Servicio Médico Forense a las instalaciones del anfiteatro del Hospital Universitario, donde se espera sean reclamados."

De dicha nota se desprende que en Cadereyta Nuevo León, fueron asesinadas 49 personas y sus cuerpos decapitados y encontrados a la orilla de la carretera, por lo que se hizo un despliegue de efectivos estatales, de **policía ministerial** y de elementos de la Policía Federal y Militares.

Se presume que los cuerpos podrían pertenecer a migrantes, ya que algunos tenían facciones propias de estados al sur del país.

Respecto a los cuerpos localizados en San Fernando, además de los boletines de prensa entregados por el sujeto obligado, se localizaron los siguientes:

• **PGR: Boletín 553/11**

Título: EL AMPF DE SIEDO ENTREGÓ LOS CUERPOS DE CINCO VÍCTIMAS DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS, LUEGO DE SER PLENAMENTE IDENTIFICADOS⁵

Fecha: 23 de Mayo de 2011

⁵ En: <http://www.pgr.gob.mx/Prensa/2007/bol11/May/b55311.shtm>.

Otros ejemplos de boletines en la materia pueden consultarse en las ligas siguientes:

1.- <http://www.pgr.gob.mx/Prensa/2007/bol11/Jul/b78411.shtm>.

2.- <http://www.pgr.gob.mx/Prensa/2007/bol11/jul/b81211.shtm>.

3.- <http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol11/Dic/b162411.shtm>.

4.- <http://www.pgr.gob.mx/Prensa/2007/bol11/jun/b60611.shtm>.

5.- <http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol07/Feb/b08007.shtm>.



**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

El agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada realizó la entrega de cinco cuerpos de víctimas procedentes de Guanajuato, Guerrero y Michoacán, que se encontraban en el grupo de las 120 víctimas que fueron trasladadas de San Fernando, Tamaulipas, al Distrito Federal.

Con éstos, suman nueve los cuerpos que han sido entregados en el Distrito Federal y que fueron identificados a través de múltiples estudios periciales como son: los protocolos de necropsia, la obtención de perfiles genéticos, dictámenes de odontología, antropología, criminalística de campo, necrodactilia, fotografía y video, con motivo de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/197/2011.

Cabe destacar que desde el 2 de abril, fecha en que la Procuraduría General de la República atrajo la investigación, existe una estrecha coordinación y colaboración con la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, y que personal ministerial continúa proporcionando atención a familiares de personas desaparecidas, se siguen recibiendo dictámenes con resultados de ADN de las Procuradurías Generales de Justicia de los estados, y se prosigue con la compulsión de datos con las muestras que se han recabado hasta el momento.

La Procuraduría General de la República reitera nuevamente el llamado para que las personas con familiares que se encuentren en calidad de desaparecidos o que desconozcan su paradero, pero tengan conocimiento de que se dirijan a la frontera norte en el período aproximado del 19 al 31 de marzo de 2011, denuncien ante las Delegaciones de la Procuraduría General de la República y las Procuradurías de Justicia en los estados, con la finalidad de recabar muestras de ADN encaminados a la identificación de las víctimas y, en su caso aporten:

1. Documentos con huellas dactilares, como pueden ser cartilla del Servicio Militar Nacional, credencial de elector, acta de matrimonio o alguna otra. [...]
6. Muestras biológicas de familiares directos padres, hermanos, hijos para estudio de ADN.

[...] Las diligencias se mantienen, con base en líneas de trabajo surgidas de la investigación ministerial dirigidas por el Fiscal de la Federación adscrito a Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, con el apoyo pericial. [...]

• 6° Informe de Labores de la PGR⁶

1.5 Extradiciones y Asistencia Jurídica [...]

• Asistencia jurídica internacional

En ejercicio de las atribuciones que competen en materia de asistencia jurídica internacional, dentro del periodo del 1 de septiembre de 2011 al 30 de junio de 2012, las solicitudes más sobresalientes son:

- Asistencia jurídica iniciada con motivo de las fosas clandestinas encontradas en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010.

⁶En: <http://www.pgr.gob.mx/Temas%20Relevantes/Documentos/Informes%20Institucionales/2012/Sexto%20Informe%20de%20Labores%20de%20la%20PGR.pdf> (pp. 57, 58 y 101).



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

o Derivado de la indagatoria instaurada por la institución a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, en septiembre de 2010, **se envió solicitud de asistencia jurídica internacional** a las autoridades de los gobiernos de Brasil, Ecuador, Honduras, El Salvador, Guatemala, India, Panamá, Bolivia, Nicaragua, Colombia, Costa Rica y Cuba, **a efecto de que procedieran a la identificación de posibles nacionales de dichos países con el envío de un disco compacto que contenía las huellas dactilares de los cadáveres encontrados en Tamaulipas. Con la colaboración de las autoridades de los gobiernos de Ecuador, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Brasil, Nicaragua, Bolivia, Colombia y Panamá ha sido posible lograr la identificación de varios cuerpos encontrados.**

o **De los 72 cuerpos localizados** en el ejido El Huizachal, en el municipio de San Fernando, **fue posible la identificación y repatriación de 59 cadáveres** de la siguiente forma: Honduras 23, El Salvador 14, Guatemala 13, Brasil cuatro, Ecuador cuatro, India uno. **Únicamente quedaron 13 cadáveres sin identificar, los cuales el 22 de junio de 2011 fueron trasladados al Panteón Civil de la Ciudad de México para su inhumación y se encuentran en la fosa exclusiva número 17-bis.** Los cuerpos fueron colocados en bolsas especiales en las que se señaló con tinta indeleble el número de registro asignado a cada cadáver dentro de la indagatoria correspondiente.

o El 1 de noviembre de 2011, la Cancillería informó que se envió a la Embajada de México en la India la solicitud de asistencia jurídica mediante la cual se remiten a las autoridades de ese país las fichas dactilares, debidamente traducidas al idioma inglés, de los 13 cadáveres que aún faltan por ser identificados.

– Asistencia jurídica iniciada con motivo de las fosas clandestinas encontradas en San Fernando, Tamaulipas, en abril de 2011.

o Derivado de indagatoria instaurada por la PGR, a través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), en 2011, se envió el 10 de junio de 2011 **la solicitud de asistencia jurídica internacional a las autoridades de los gobiernos de Guatemala y El Salvador, a efecto de obtener todos los datos disponibles de las personas de nacionalidad guatemalteca y salvadoreña reportadas como desaparecidas, los perfiles genéticos de sus familiares**, la documentación que contenga huellas dactilares y fotografías, tales como registros de población, vecindad, nacionalidad, ciudadanía, electorales, registros dentales o expedientes clínicos dentales, o bien, cualquier indicio que permita la identificación de los cuerpos localizados. **Se procedió a la identificación de un nacional guatemalteco, Feliciano Tagual Ovalle, cuyo cuerpo fue entregado en mayo de 2011.**

o Derivado de la realización de diversas diligencias, el pasado 16 de marzo de 2012 fueron repatriados a su país de origen nueve cadáveres plenamente identificados como nacionales guatemaltecos; la diligencia estuvo a cargo de Instituto Nacional de Migración.

[...]



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

De lo anterior se desprende que de los 72 cuerpos localizados en el ejido El Huizachal, en el municipio de San Fernando, fue posible la identificación y repatriación de 59 cadáveres de la siguiente forma: Honduras 23, El Salvador 14, Guatemala 13, Brasil cuatro, Ecuador cuatro, India uno. Únicamente quedaron 13 cadáveres sin identificar, los cuales el 22 de junio de 2011 fueron trasladados al Panteón Civil de la Ciudad de México para su inhumación

Sexto. En este considerando se determinará si la respuesta proporcionada por la Procuraduría General de la República, relativa a las acciones realizadas para poner a disposición de los familiares información sobre el progreso de la investigación respecto de los casos de los 49 cuerpos encontrados en Cadereyta, Nuevo León, de los 72 migrantes encontrados en San Fernando, Tamaulipas el 25 de agosto de 2010 y del caso de 193 cuerpos localizados en fosas clandestinas en San Fernando, en 2011, satisface la solicitud de acceso de la particular; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley de la materia, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables al caso concreto.

Es importante recordar que, tanto en su respuesta inicial como en su oficio de alegatos, el sujeto obligado a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, manifestó que:

En observancia al principio de máxima publicidad, se hacía de su conocimiento que existía información en relación a su solicitud que se encuentra disponible públicamente en el Sistema de Solicitudes de Información (Infomex), por lo anterior se le indicó a la particular consultar la dirección electrónica <https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action> donde tendría que seleccionar el apartado correspondiente a "Consulta Pública de Solicitudes" e ingresar el número de folio 0001700160811.

De igual manera, se le hizo de su conocimiento que la información que es pública se encuentra disponible en la página de Internet de la Institución en www.pqr.gob.mx en los siguientes Boletines de Prensa:

- 1040/10 de fecha 29 de agosto de 2010.
- 1050/10 de fecha 01 de septiembre de 2010.
- 1051/10 de fecha 01 de septiembre de 2010.
- 1063/10 de fecha 05 de septiembre de 2010.
- 1189/10 de fecha 16 de octubre de 2010.



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

- 093/11 de fecha 31 de enero de 2011.
- 1568/11 de fecha 14 de noviembre de 2011.
- 214/12 de fecha 13 de mayo de 2012.

Al respecto, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se establece que:

"Artículo 4. Son objetivos de esta Ley:

I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos;

II. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados;

III. Garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados;

IV. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados;

V. Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos, y

VI. Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado de derecho.

Artículo 6. En la interpretación de esta Ley y de su Reglamento, así como de las normas de carácter general a las que se refiere el Artículo 61, **se deberá favorecer el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados.**

(...)

Artículo 40. Cualquier persona o su representante podrá presentar, ante la unidad de enlace, una solicitud de acceso a la información mediante escrito libre o en los formatos que apruebe el Instituto. La solicitud deberá contener:

(...)

II. La descripción clara y precisa de los documentos que solicita;

III. Cualquier otro dato que propicie su localización con objeto de facilitar su búsqueda, y



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

(...)

Artículo 41. La unidad de enlace será el vínculo entre la dependencia o entidad y el solicitante, ya que es la responsable de hacer las notificaciones a que se refiere esta Ley. Además, deberá llevar a cabo todas las gestiones necesarias en la dependencia o entidad a fin de facilitar el acceso a la información.

Artículo 42. Las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos. La obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta los documentos en el sitio donde se encuentren; o bien, mediante la expedición de copias simples, certificadas o cualquier otro medio.

El acceso se dará solamente en la forma en que lo permita el documento de que se trate, pero se entregará en su totalidad o parcialmente, a petición del solicitante.

Artículo 43. La unidad de enlace turnará la solicitud a la unidad administrativa que tenga o pueda tener la información, con objeto de que ésta la localice, verifique su clasificación y le comunique a la primera la procedencia del acceso y la manera en que se encuentra disponible, a efecto de que se determine el costo, en su caso."

[Énfasis añadido]

De los preceptos transcritos, es posible concluir que entre los objetivos de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental* se encuentran el proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos y transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados; asimismo, se tiene que en la interpretación de dicho ordenamiento legal y de su Reglamento, se deberá favorecer el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados.

Ahora, vale la pena señalar que si bien la Procuraduría General de la República en su alcance al escrito de alegatos manifestó que en relación con los hechos suscitados en Cadereyta en Mayo de 2012 la información solicitada se encontraba clasificada como reservada de conformidad con lo señalado en las fracciones I y III del artículo 14 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental* y en relación con lo estipulado por el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, lo cierto es que al estar solicitándose "acciones realizadas" para dar a conocer el avance de la investigación, se desprende que lo anterior no podría obrar en averiguación



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

previa alguna, toda vez que son tareas que el sujeto obligado estaría realizando independientes al proceso de investigación.

Lo anterior, toda vez que los documentos que atenderían a lo solicitado por la hoy recurrente pudieran ser los oficios o comunicaciones entre la Procuraduría General de la República y diversas instancias nacionales o internacionales respecto al progreso de la investigación, incluso documentos de carácter normativo, mismos que no se localizan dentro del expediente de averiguación previa.

Ahora bien, cuando un particular presenta una solicitud de acceso a la información, la misma deberá contener, entre otros datos, la descripción clara y precisa de los documentos que solicita y cualquier otro dato que propicie su localización con objeto de facilitar su búsqueda, por lo que la Unidad de Enlace deberá llevar a cabo todas las gestiones necesarias a fin de facilitar el acceso a la información; en ese sentido, las dependencias y entidades cumplen con la obligación de acceso a la información que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental **hasta en tanto entreguen al particular la información solicitada, en su totalidad o parcialmente**, a petición del solicitante.

En ese sentido, de las constancias que obran en el expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la Procuraduría General de la República turnó la solicitud a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la cual tiene, entre otras atribuciones, actualizar sistemas estadísticos y de análisis de la información relativa al fenómeno de la delincuencia en sus ámbitos nacional e internacional.

En ese sentido, del análisis realizado por este Instituto a la respuesta proporcionada se pudo advertir que, los boletines de prensa señalados por el sujeto obligado en su respuesta, en estos, no se hace referencia a lo requerido por el particular, sino que únicamente hacen alusión a los hechos acontecidos tanto en Cadereyta, Nuevo León, así como en San Fernando, Tamaulipas; sin que en ningún momento de la lectura de los mismos se desprendan las acciones realizadas para dar información a los familiares de dichas víctimas..

Por lo tanto, este Instituto no puede tener por satisfecha la solicitud de información, toda vez que la respuesta proporcionada por el sujeto obligado no atiende lo solicitado por el recurrente.



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

Ahora bien, es importante recordar que de conformidad con la normatividad analizada en el considerando que precede, específicamente en el ámbito internacional, en la *"Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder"* adoptada por la Asamblea General de la Organización de la Naciones Unidas, mediante resolución número 40/34, del 29 de noviembre de 1985, se considera como víctima a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros (entre ellos México), incluida la que proscribe el abuso de poder.

Las víctimas deberán ser tratadas con compasión y respeto a su dignidad, y tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional.

En relación con lo anterior, los estados facilitarán la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas, realizando, entre otras cosas, lo siguiente:

1. Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves, y cuando hayan solicitado esa información;
2. Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial, y
3. Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares, y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia.

En ese sentido, dado que la normatividad internacional establece ciertos principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos los cuales son reconocidos por el Estado Mexicano, éste se encuentra obligado a establecer procedimientos internos en los términos referidos anteriormente.

Así, en la legislación interna, específicamente en la Ley General de Víctimas, se prevé que son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan relación inmediata con ella.



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

Asimismo, en el marco de la aplicación de esta Ley, le corresponde al Ministerio Público en el marco de esta Ley, entre otras cosas, informar a la víctima, desde el momento en que se presente o comparezca ante él, los derechos que le otorga la Constitución y los tratados internacionales, el código penal y procesal penal respectivo, y las demás disposiciones aplicables, así como el alcance de esos derechos, debiendo dejar constancia escrita de la lectura y explicación realizada.

Asimismo, solicita las pruebas conducentes a fin de acreditar, determinar y cuantificar el daño de la víctima, especificando lo relativo a daño moral, y daño material.

Ahora bien, por lo que hace al procedimiento de búsqueda, es importante recordar que en los artículos 43 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70, fracciones I y II de su Reglamento, se establece:

"Artículo 43. La unidad de enlace turnará la solicitud a la unidad administrativa que tenga o pueda tener la información, con objeto de que ésta la localice, verifique su clasificación y le comunique a la primera la procedencia del acceso y la manera en que se encuentra disponible, a efecto de que se determine el costo, en su caso.
(...)"

"Artículo 70.

Los Comités de cada dependencia o entidad podrán establecer los plazos y procedimientos internos para dar trámite a las solicitudes de acceso, el cual deberá desahogarse en el plazo máximo de veinte días hábiles a que se refiere el primer párrafo del artículo 44 de la Ley, incluida la notificación al particular a través de la Unidad de Enlace. En caso de no hacerlo, dicho procedimiento se ajustará a lo siguiente:

I. Recibida la solicitud, la Unidad de Enlace deberá turnarla a la o las unidades administrativas que puedan tener la información dentro de los dos días hábiles siguientes a aquel en que se haya recibido la solicitud.

II. En caso de contar con la información y que ésta sea pública, la unidad administrativa deberá notificarlo a la Unidad de Enlace dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se haya recibido la solicitud por parte de dicha Unidad, precisando, en su caso, los costos de reproducción y envío de acuerdo con las diversas modalidades que contemplan los artículos 51 y 54 de este Reglamento, o bien la fuente, lugar y forma en que se puede consultar, reproducir o adquirir, así como sus costos, si se tratara del supuesto a que se refieren los artículos 42, tercer párrafo de la Ley, 50 y 52 del Reglamento;

(...)"



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

En términos de los artículos referidos, cuando un sujeto obligado recibe una solicitud de información, la Unidad de Enlace respectiva debe remitirla a la (s) unidad (es) administrativa (s) que tenga (n) o pueda (n) tener la información, con objeto de que ésta (s) la localice (n), verifique (n) su clasificación y le comuniqué (n) a la primera la procedencia del acceso y la manera en que se encuentra disponible.

Al respecto, como se analizó en el considerando cuarto de la presente resolución, para el desarrollo de sus funciones la Procuraduría General de la República cuenta, entre otras unidades administrativas con la, Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías; Dirección General de Procedimientos Internacionales, y la Dirección General de Cooperación Internacional, toda ellas adscritas a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, las cuales cuentan con las siguientes atribuciones:

- La Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías, le corresponde, entre otras funciones:
 1. Coordinar el ejercicio de las atribuciones del Ministerio Público de la Federación en materia internacional;
 2. Coordinar a las agregadurías y oficinas de enlace;
 3. Coordinar la intervención de la Procuraduría en los procedimientos internacionales;
 4. Coordinar el desahogo y atención de los asuntos competencia de la Procuraduría con mecanismos, y organismos internacionales de derechos humanos;
 5. Desahogar las consultas jurídicas internacionales que le sean formuladas por las unidades administrativas u órganos desconcentrados de la Institución, así como por otras autoridades federales, del Distrito Federal y de los Estados de la República, relacionadas con el ámbito de sus funciones.
- La Dirección General de Procedimientos Internacionales, entre otras, las siguientes:



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

1. Realizar el análisis jurídico de la legislación extranjera en las materias penal y procesal penal, así como de los instrumentos jurídicos internacionales en materia de extradición, asistencia jurídica internacional, recuperación de activos y otros en el ámbito de competencia de la Procuraduría;
 2. Establecer, en coordinación con las autoridades competentes, canales de comunicación y mecanismos de cooperación con autoridades extranjeras, y organismos internacionales, para realizar actividades en materia de extradición, asistencia jurídica internacional, recuperación de activos y otros en el ámbito de competencia de la Procuraduría;
 3. **Colaborar en el cumplimiento de acuerdos y tratados internacionales relacionados con asistencia jurídica internacional, extradición, devolución de bienes, recuperación de activos, ejecución de sentencias penales y demás asuntos de carácter internacional que competan a la Procuraduría, y**
 4. Auxiliar en la práctica de diligencias y obtención de información en el extranjero, a las distintas unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución, así como a las procuradurías generales de justicia o instituciones análogas de los estados y del Distrito Federal.
- Corresponde a la Dirección General de Cooperación Internacional, entre otras atribuciones, Participar, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes de la Institución, en la implementación de las medidas institucionales para la atención de los requerimientos, visitas, medidas cautelares y recomendaciones formuladas por mecanismos y organismos internacionales de derechos humanos, y desahogar las consultas jurídicas internacionales que le sean formuladas por las unidades administrativas de la Institución, así como por otras autoridades federales, del Distrito Federal y de los Estados de la República, relacionadas con el ámbito de sus funciones.

Por último, la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad es la encargada de atender por parte de la Institución, en términos de las disposiciones legales aplicables, los Programas de la CNDH relacionados con la procuración de justicia, así como coadyuvar con la Dirección General de Cooperación Internacional en el seguimiento a los acuerdos tomados por las instancias de coordinación para la atención de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los que México sea parte.



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

Asimismo, atiende y da seguimiento, en coordinación con las autoridades correspondientes, los requerimientos, visitas, medidas cautelares y recomendaciones que los organismos internacionales de derechos humanos realicen, respecto de casos que sean competencia de la Procuraduría General de la República.

En ese sentido, si bien el sujeto obligado realizó la búsqueda en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, lo cierto es que de las constancias que integran el presente recurso no se advierte que haya realizado una búsqueda en la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías; Dirección General de Procedimientos Internacionales, y la Dirección General de Cooperación Internacional, toda ellas adscritas a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, las cuales por sus atribuciones podrían contar con la información.

Bajo esta tesitura, con fundamento el artículo 56, fracción III de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, este Instituto determina procedente **revocar** la respuesta de la Procuraduría General de la República, toda vez que de la misma, no se desprende que en ésta se haga referencia a las acciones realizadas para poner a disposición de los familiares información sobre el progreso de la investigación respecto de los casos de los 49 cuerpos encontrados en Cadereyta, Nuevo León, de los 72 migrantes encontrados en San Fernando, Tamaulipas el 25 de agosto de 2010 y del caso de 193 cuerpos localizados en fosas clandestinas en San Fernando, en 2011.

Por lo tanto, se **instruye** a la Procuraduría General de la República para que términos de los artículos 43 del citado ordenamiento legal y 70, fracciones I y II de su Reglamento, realice una búsqueda exhaustiva de todos los documentos que pudieran dar respuesta a lo solicitado por la particular, mismos que pudieran ser los oficios o comunicaciones entre la Procuraduría General de la República y diversas instancias nacionales o internacionales -como pudieran ser los consulados de los países de residencia de los familiares de las personas asesinadas- respecto al progreso de la investigación, incluso documentos de carácter normativo, en la que no podrá omitir la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías; Dirección General de Procedimientos Internacionales, y la Dirección General de Cooperación Internacional, toda ellas adscritas a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, y entregue a la recurrente.



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

**Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

Cabe señalar que en caso de que la información sea de carácter normativo, el sujeto obligado deberá proporcionar al recurrente la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar la normativa solicitada de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Ahora bien, en caso de que la información obre en documentos que no sea normativa, No se omite señalar que la modalidad de entrega elegida por la recurrente, fue por Internet en el INFOMEX, lo cual ya no es posible por el momento procesal en el que se encuentra el procedimiento, por lo que la Procuraduría General de la República deberá entregar la información requerida a la recurrente, a través del correo electrónico señalado por éste en su solicitud de información, o en un sitio de Internet y comunicarle los datos que le permitan acceder a la misma. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 del Reglamento de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*.

Por lo expuesto y fundado, este Pleno:

RESUELVE

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 55, fracción V y 56, fracción III de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental* se **revoca** la respuesta de la Procuraduría General de la República, en términos de lo dispuesto en el último considerando de la presente resolución.

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 56, párrafo segundo de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, así como 91 de su *Reglamento*, se instruye a la Procuraduría General de la República, para que en un término no mayor de diez días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación, cumpla con la misma, y en el mismo término informe a este Instituto sobre su cumplimiento.

TERCERO: Con fundamento en el artículo 86, fracción III del *Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, notifíquese la presente resolución a la recurrente, en la dirección señalada para tales efectos y, por la Herramienta de Comunicación, al Comité de Información de la Procuraduría General de la República, a través de su Unidad de Enlace.



Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos

Dependencia ante la cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700104513
Número de expediente: RDA 2490/13
Comisionado Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar

CUARTO: Con fundamento en los artículos 37, fracción XIX y 56, párrafo segundo de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, así como en el numeral tercero del *Acuerdo por el que se delegan diversas facultades de representación legal del Instituto*, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 08 de mayo de 2007, se instruye a la Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública Federal del Instituto, el seguimiento de la presente resolución.

QUINTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el número telefónico 01-800-TELIFAI (835-4324) y el correo electrónico vigilancia@ifai.org.mx, para que comunique a este Instituto sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.

Así lo resolvieron los Comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, Sigríd Arzt Colunga, Jacqueline Peschard Mariscal, Gerardo Laveaga Rendón y Ángel Trinidad Zaldívar, siendo ponente el último de los mencionados, en sesión celebrada el 07 de agosto de 2013, ante la Secretaria de Acceso a la Información, Cecilia Azuara Arai.